



# Informe sobre la Fiscalidad aplicable a los Parques Eólicos Marinos en España

---

INFORME ELABORADO POR  
**GARRIGUES**





# Informe sobre la Fiscalidad aplicable a los Parques Eólicos Marinos en España

---

INFORME ELABORADO POR  
**GARRIGUES**

Este documento contiene información de carácter general y no constituye opinión profesional ni servicio de asesoramiento legal o fiscal.

© Junio 2023. J&A Garrigues, S.L.P.  
Quedan reservados todos los derechos.  
Se prohíbe la explotación, reproducción, distribución, comunicación pública o transformación, total o parcial, de esta obra sin autorización previa y por escrito de J&A Garrigues, S.L.P.

El presente documento es emitido a solicitud de ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA al objeto y fines que se describe en el mismo.

#### **Diseño y maquetación**

a.f. diseño y comunicación  
[www.afgrafico.com](http://www.afgrafico.com)

#### **Depósito legal**

M-22118-2023

# ÍNDICE

<b>1. Antecedentes</b>	<b>6</b>
<b>2. Resumen Ejecutivo</b>	<b>8</b>
Imposición nacional	8
Imposición autonómica	10
Imposición local	10
Régimen económico y fiscal de Canarias	11
<b>3. Imposición nacional</b>	<b>12</b>
Imposición en Régimen General	12
Imposición Medioambiental	12
<b>4. Imposición autonómica</b>	<b>18</b>
Introducción	18
Imposición Medioambiental	21
<b>5. Imposición local</b>	<b>26</b>
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de categorías especiales	28
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)	30
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)	31
Tasa por el Otorgamiento de Licencia Urbanística	32
Tasa por ocupación o aprovechamiento del dominio público local	32
Cánones por prestaciones compensatorias en el ámbito local	35
<b>6. Descripción régimen económico y fiscal de Canarias</b>	<b>36</b>
Introducción	36
Compatibilidad del REF con otras ayudas medioambientales	40
La Zona Especial Canaria	43
Bonificación por producción de bienes corporales	45
Deducción por adquisición de activos fijos nuevos	46
La Reserva para Inversiones en Canarias	47
<b>Normativa aplicable</b>	<b>48</b>
<b>ANEXO</b>	<b>49</b>

# 1. ANTECEDENTES

La protección del medio ambiente y la necesidad del crecimiento económico se han convertido en las mayores preocupaciones de la sociedad en los últimos tiempos. Desde la segunda mitad del siglo pasado se comienzan a fijar en los tratados y convenios internacionales normativas específicas de protección ambiental y se tiene presente el medio ambiente al objeto de regular adecuadamente el desarrollo de los mercados en general y, ya en el ámbito europeo, la compatibilidad de los objetivos de la Comunidad, lo que dio lugar a los primeros programas de acción sobre medio ambiente (PMA).

Las sucesivas crisis energéticas acaecidas en los años setenta del siglo pasado, ponían el foco de atención en la vulnerabilidad de las naciones en general, y de Europa en particular, por la dependencia energética del exterior, lo que requería tomar medidas para lograr un uso racional de la energía y la implementación en el uso de energías renovables dado su papel esencial en la reducción de emisiones y de prevención del cambio climático.

De aquellos textos iniciales, surge en la Unión Europea en 2006 el Libro Verde que establece los fundamentos de la nueva política energética europea con la identificación de los sectores en los que debía actuar la Unión, y que tras la entrada en vigor el 1 de diciembre de 2009 del Tratado de Lisboa, da lugar al **"Paquete energía y clima"** compuesto por diversos actos legislativos referidos a los ámbitos de actuación en esta materia, entre los cuales se encuentra la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.

Por su parte, el 13 de septiembre de 2012 se efectúa por la Comisión la comunicación por la que se describen las oportunidades para un crecimiento marino y marítimo sostenible considerando que el mar y las costas son motores de la economía así como el papel protagonista que los puertos y las comunidades costeras, por su situación geográfica abierta al exterior, han desempeñado en relación con nuevas oportunidades y como fuentes de innovación, crecimiento y utilización sostenible de los recursos marinos, adoptando la denominada **"Estrategia de Crecimiento Azul"**.

Esta estrategia consideraba la energía de origen marino (la denominada "Energía Azul") como uno de los ámbitos prioritarios para proporcionar un crecimiento sostenible, apuntando que en 2030 la energía eólica marina podría suministrar el 14% de la demanda eléctrica en la Unión Europea, superando a la eólica terrestre en capacidad de instalación anual con

una repercusión extraordinaria en la creación de puestos de trabajo que, según las previsiones, se situaría en más de 300.000 puestos en 2030.

Una de las herramientas identificadas por la Política Marítima Integrada de la UE para promocionar el crecimiento azul es la ordenación del espacio marítimo. En este contexto se desarrolló la Directiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo. Esta Directiva se traspuso al ordenamiento español a través del Real Decreto 363/2017, de 8 de abril, por el que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo, incluyendo la obligación para España de elaborar un plan de ordenación del espacio marítimo para cada una de las cinco demarcaciones marinas (DM) españolas: DM noratlántica, DM sudatlántica, DM del Estrecho y Alborán, DM levantino-balear y DM canaria.

De este modo, con fecha 19 de noviembre de 2020, la Comisión Europea adoptó la "*Estrategia UE sobre las Energías Renovables Marinas*", que establece el objetivo de aumentar la capacidad de producción de energía eólica marina en la Unión Europea desde su nivel actual de 12 GW a, como mínimo, 60 GW para 2030 y 300 GW para 2050. Este desarrollo se complementaría con 40 GW de energía oceánica y otras tecnologías emergentes de aquí a 2050, por lo que resultaba esencial avanzar en la implementación normativa y en el seguimiento de la denominada Hoja de Ruta Eólica Marina y Energías del Mar en España. La aprobación el pasado 28 de febrero de 2023 de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) a través de los cuales se delimitan las actividades, áreas y usos del espacio marítimo ha supuesto el hito definitivo para el desembarco de la energía flotante en España.

A partir de aquí se seguirá el itinerario marcado por las Administraciones para la implementación de la energía eólica en la Hoja de Ruta a desarrollar hasta el 2030, y uno de los elementos relevantes a tomar en consideración en todo este proceso es la fiscalidad asociada a una nueva regulación y desarrollo de la actividad eólica, a cuyos efectos, se ha preparado el presente documento en el que se analiza el esquema tributario actual en relación con el desarrollo de la actividad eólica y el encaje de las figuras impositivas habituales en el nuevo esquema de producción de energía eléctrica.

## 2. RESUMEN EJECUTIVO

De acuerdo a los distintos apartados se resumen los aspectos más relevantes identificados en relación con el análisis de la tributación nacional, autonómica y local, así como del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

### IMPOSICIÓN NACIONAL

#### Impuesto sobre Sociedades

La producción de energía a través de la eólica renovable estará gravada por este impuesto, cuyo ámbito de aplicación abarca el conjunto del territorio español, lo que incluye las zonas adyacentes a las aguas territoriales.

El tipo de gravamen es del 25% con carácter general o del 4% para las empresas acogidas al Régimen de la ZEC.

#### El Impuesto sobre el Valor de la Producción Eléctrica

Este tributo grava la realización de actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, por lo que incluiría la producción de energía eléctrica de fuente eólica marina.

La base imponible la constituye el importe total que le corresponda percibir al contribuyente por la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, siendo el tipo de gravamen del 7% sobre la referida base imponible.

El contribuyente no puede repercutir el impuesto a terceros, debiendo registrarse como un gasto en la cuenta de resultados.

#### Ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)

Podrá fijarse un canon a favor de la Administración del Estado por ocupación o aprovechamiento del DPMT estatal en virtud de una concesión o autorización.

Por la ocupación de terrenos la cuantía del canon será el 8% de la base de liquidación.

Por la ocupación del mar territorial por obras e instalaciones destinadas a la investigación o explotación de recursos mineros y energéticos la cuantía del canon será de 0,006 euros por metro cuadrado de superficie ocupada, aplicable a las concesiones de plantas eólicas marinas.



## Tasas portuarias

Las tasas portuarias son exigidas por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público portuario y por la prestación del servicio de señalización marítima. Las tasas podrán devengarse por ocupación del dominio público portuario, por actividades comerciales, industriales y de servicios, por utilización de las instalaciones portuarias o de ayudas a la navegación.

La tasa de ocupación grava la ocupación del dominio público portuario, y el de su vuelo y subsuelo, al amparo de una autorización o concesión demanial de las previstas en TRLPEMM. A este respecto, la ocupación por parte de las líneas de evacuación de eólica marina que transcurre por dominio público portuario devengaría la correspondiente tasa.

## El Impuesto Especial sobre la Electricidad

Impuesto que recae sobre el consumo de electricidad y grava:

- El suministro de energía eléctrica para consumo (tanto la prestación del servicio de peajes de acceso a la red eléctrica como la entrega de electricidad).
- El consumo por los productores de aquella electricidad generada por ellos mismos.

La energía consumida por las plantas eólicas marinas para su funcionamiento debería quedar exenta por la configuración actual de dos exenciones:

- Exención a la energía eléctrica producida en instalación de tecnología renovable, cogeneración y residuos cuya potencia instalada no supere los 50 MW, siempre y cuando sea consumida por los titulares de dicha instalación.
- Exención a la energía eléctrica adquirida y suministrada a las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica para la realización de las referidas actividades.



# IMPOSICIÓN AUTONÓMICA

# IMPOSICIÓN LOCAL

Límites competenciales de las Comunidades Autónomas para la fijación de tributos relativos al ordenamiento, explotación y autorizaciones de actividades realizadas en el mar territorial de la Comunidad Autónoma desde el punto de vista territorial y jerárquico, al no poder crear tributos propios sobre hechos imponibles ya gravados por el Estado o por los tributos locales.

Se han aprobado prestaciones por las Comunidades Autónomas en el desarrollo de actividad de eólica terrestre (Galicia, Castilla-La Mancha o Castilla-León) que gravan el desarrollo de la actividad por los parques eólicos (canon eólico).

Estos cánones están amparados en competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma distintas de las derivadas de la organización territorial, como la protección del medio ambiente.

Se puede producir una ampliación del ámbito competencial favorecido por las reformas recientes de los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas con mayores atribuciones, lo que les permitiría aprobar cánones o prestaciones similares a las existentes para la eólica terrestre.

Ya se está anunciando la posibilidad de fijar cánones equivalentes al terrestre para la eólica marina: caso gallego.

Con carácter general, debe destacarse la falta de competencia en relación con las actividades desarrolladas en mar territorial, al estar atribuida la ordenación del dominio público marino al Estado, e imposibilidad de gravar hechos imponibles coincidentes.

## **Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de categorías especiales ("BICE")**

El aerogenerador se ubicaría en mar territorial (competencia estatal).

Desde el punto de vista conceptual, el aerogenerador no encajaría en el concepto de bien inmueble, ni en la delimitación actual del BICE conforme normativa catastral vigente ("un conjunto complejo que, por su carácter unitario y por estar ligado de forma definitiva para su funcionamiento, se configura como un único bien inmueble").

## **Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)**

Hecho imponible del epígrafe 151.4 de la sección primera de las Tarifas del IAE: producción de energía eléctrica, gravándose los kW de potencia generada: la producción de energía se produce en el aerogenerador.

## **Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)**

La instalación de un aerogenerador en mar territorial no precisaría de licencia de obras o urbanística, toda vez que es una obra que se asienta en dominio público marítimo-terrestre, por lo que no estará sujeto al ICIO.

No obstante, por la parte de la infraestructura de evacuación que se realiza en tierra podría exigirse en la medida en que el Ayuntamiento ostenta competencia.

### **Tasa por el Otorgamiento de Licencia Urbanística**

La licencia municipal, se devenga por la actividad administrativa tendente a verificar si los actos de edificación y uso del suelo se adecúan o no a la normativa urbanística. En este caso, esta tasa no se devengaría en tanto no se realice ninguna actividad que requiera el otorgamiento de licencia municipal.

### **Tasa por ocupación o aprovechamiento del dominio público local**

No se devengaría por el aerogenerador, salvo que se introduzca supuesto específico que pudiera gravar las infraestructuras de evacuación que se realicen en tierra y, por tanto, en el ámbito territorial del municipio.

### **Cánones por prestaciones compensatorias en el ámbito local**

La configuración actual de este tipo de prestaciones públicas no permitiría gravar la eólica marina por la falta de competencia de los entes locales. Sin embargo, el desarrollo de la actividad a una distancia relativamente corta del litoral podría determinar que los municipios que consideren afectados sus intereses jurídicos o económicos pretendan compensar dichas circunstancias con la aprobación de este tipo de cánones.

## **RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS**

Canarias ostenta un tratamiento diferenciado por su carácter de "Región Ultraperiférica" en el ámbito comunitario.

La regulación de las especificidades en el ámbito de la política económica y fiscal se encuentra en la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF).

Los incentivos fiscales derivados del REF (Reserva para Inversiones en Canarias, Deducción por Inversiones en Canarias, Bonificación por producción, Zona Especial Canaria, etc...), tienen la consideración de Ayudas de Estado, y están sometidos a reglas de control y de suministro de información, resultándoles de aplicación los límites de ayuda establecidos a efectos comunitarios.

En caso de que se aprobaran ayudas de Estado medioambientales en forma de contratos por diferencias para la eólica marina, éstas y las ayudas de Estado regionales del REF de Canarias podrían ser compatibles, pero habrá que estar el modo en que finalmente se estructuren y aprueben, dado que podrían incluir un régimen propio de incompatibilidades de ayudas de Estado, notificaciones, intensidad de las ayudas, acumulación, etc.



# 3. IMPOSICIÓN NACIONAL

## Imposición en Régimen General

### Impuesto sobre sociedades

El Impuesto sobre Sociedades (en adelante, "IS") es un **tributo de carácter directo, personal, periódico y sintético**, que grava la renta de las sociedades y demás entidades jurídicas.

El **hecho imponible** del impuesto recae sobre la obtención de rentas por parte de las sociedades y demás entidades jurídicas, así como sobre las de otras entidades a las que, aun no teniendo personalidad jurídica, la ley les otorga la condición de contribuyentes del IS.

En este sentido, el impuesto grava la totalidad de las rentas con independencia del pagador y la fuente de generación, por lo que la producción de energía a través de la eólica renovable estará gravada por este impuesto.

El **ámbito de aplicación** del impuesto es el conjunto del territorio español, lo que incluye las zonas adyacentes a las aguas territoriales sobre las que España pueda ejercer los derechos que le correspondan, de acuerdo con lo previsto en la normativa interna y el derecho Internacional, referentes al suelo y subsuelo marino, a sus recursos naturales y a las aguas suprayacentes.

Por otra parte, la **base imponible** del impuesto se determina generalmente a través del método de **estimación directa**.

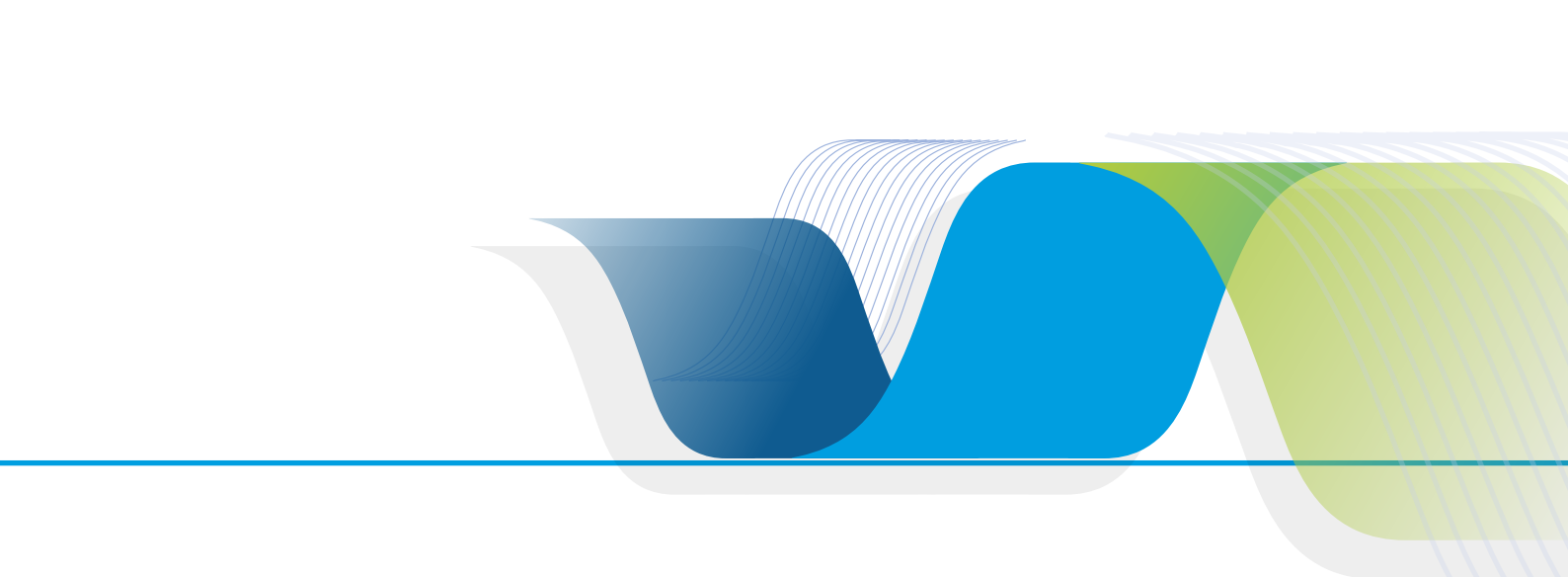
Asimismo, por lo que ahora nos ocupa, **el tipo de gravamen** aplicable con carácter general es del **25 por ciento**, si bien la normativa establece otros tipos impositivos, entre otros el tipo de gravamen del 4 por ciento, para empresas acogidas al Régimen de la Zona Especial Canaria.

## Imposición Medioambiental

### El Impuesto sobre el Valor de la Producción Eléctrica

El impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica es un **tributo de carácter directo y naturaleza real** que grava la realización de actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica (en adelante, "IVPEE")<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Este impuesto fue declarado **compatible con el Derecho Comunitario** mediante la STJUE de 3 de marzo del 2021 (asunto C-220/2019), dado que: i) la Directiva 2009/28, este último punto en relación con el artículo 2, párrafo segundo, letra k), de la misma Directiva, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que establece un impuesto que grava con un tipo único la producción de electricidad y su incorporación al sistema eléctrico, también cuando la electricidad se produce a partir de fuentes renovables, y cuyo objetivo no es proteger el medio ambiente, sino aumentar el volumen de los ingresos presupuestarios; ii) El artículo 107 TFUE, apartado 1, y los artículos 32 a 34 de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que establece un impuesto nacional que grava la producción e incorporación al sistema eléctrico de electricidad en el territorio de un Estado miembro, en el supuesto de que este impuesto no sea aplicable a la incorporación, en ese sistema, de la electricidad producida en los demás Estados miembros.



De modo que los **contribuyentes** son los que realizan las citadas actividades de producción e incorporación de energía eléctrica al sistema eléctrico peninsular y los territorios insulares y extrapeninsulares, ya sea en instalaciones de régimen ordinario o de régimen especial. Este impuesto, por tanto, gravaría la producción de energía eléctrica de fuente eólica marina.

La **base imponible** del impuesto la constituye el importe total que corresponda percibir al contribuyente por la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, medida en barras de central, por cada instalación, en el período impositivo, minorada en las retribuciones correspondientes a la electricidad incorporada al sistema durante el ejercicio.

El **tipo de gravamen** de aplicación es del **7%** sobre la referida base imponible.

Asimismo, el **período impositivo** coincide con el año natural, salvo en el supuesto de cese del contribuyente en el ejercicio de la actividad, en cuyo caso finaliza el día en que se entienda producido el cese; y el devengo se produce el último día del período impositivo.

En este sentido, la correspondiente **autoliquidación** deberá presentarse **entre el 1 y el 30 de noviembre** del año posterior.

En relación con los **pagos fraccionados**:

- Si la producción en el ejercicio anterior es superior a 500.000 euros: se deberá presentar los correspondientes a los períodos de los tres, seis, nueve y doce meses del año, en un plazo del día 1 al 20 de los meses de mayo, septiembre, noviembre y febrero siguientes, por el valor de la producción eléctrica realizada hasta la finalización del trimestre que corresponda.
- Si la producción en el ejercicio anterior no supera los 500.000 euros: se deberá presentar un único pago fraccionado entre el día 1 y el 20 de noviembre, por el valor de la producción eléctrica realizada del 1 de enero al 30 de septiembre del mismo año.

No obstante lo anterior, en virtud del artículo 5 del *Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad*, a efectos de calcular los pagos fraccionados correspondientes a los **cuatro trimestres de 2023**, el valor de la producción de la energía eléctrica, medida en barras de central, e incorporada al sistema eléctrico **durante dicho período será de cero euros**.

Por otra parte, de acuerdo con lo establecido por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en su consulta número 1-94/2013, **contablemente** el IIVPEE no reduce la cifra de negocios, debiendo registrarse como un gasto en la cuenta de resultados, ya que el contribuyente del impuesto no tiene posibilidad de repercutirlo a terceros y sin que se pueda considerar su desembolso como una transacción de naturaleza similar, pero de signo contrario, a aquellas que representan la corriente de ingresos de la actividad ordinaria de la empresa, circunstancia que justificaría tratarlo como un menor importe de la cifra de negocios

## Ocupación del dominio público marítimo terrestre

La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, establece en su artículo 84 que toda **ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre estatal** en virtud de una concesión o autorización, cualquiera que fuere la Administración otorgante, devengará el correspondiente **canon en favor de la Administración del Estado**, sin perjuicio de los que sean exigibles por aquélla.

Dicho precepto ha sido desarrollado mediante Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas y por la Orden de 30 de octubre de 1992 por la que se determina la cuantía del canon de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, establecido en el artículo 84 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Define el artículo 3 del citado RD 876/2014 como *"bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución Española y 3 de la Ley 22/1988"*, entre otros y por lo que ahora nos ocupa *"el mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, definidos y regulados por su legislación específica"*.

Pues bien, en la citada Orden Ministerial se concreta el canon por ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre estatal, señalando que para la determinación de la cuantía del canon se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones para los supuestos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre:

- **Ocupación de terrenos** (si se diera el caso):
  - a) **Base de liquidación:** Estará constituida por el valor del terreno ocupado, que se determinará por equiparación al mayor de los tres valores siguientes, aplicables a los terrenos contiguos a sus zonas de servidumbre que tengan un aprovechamiento similar a los usos que se propongan para el dominio público solicitado: El valor catastral, el comprobado por la Administración a efectos de cualquier tributo, o el precio, contraprestación o valor de adquisición declarados por los sujetos pasivos.

El valor resultante será incrementado con el importe medio estimado de los beneficios netos anuales, antes de impuestos, que sea previsible obtener en la utilización del dominio público durante el período concesional.

- b) **La estimación de dichos beneficios** se realizará teniendo en cuenta los estudios económicos que facilite el solicitante de la concesión o autorización, así como las informaciones que pueda recabar y las valoraciones que pueda efectuar la Administración otorgante, directamente o por comparación con otras concesiones existentes. En ningún caso esta estimación será inferior al 20% del importe de la inversión a realizar por el solicitante.

Cuantía del canon: Será el 8% de la base de liquidación determinada con arreglo a lo establecido en la letra anterior.

El canon se revisará periódicamente en la medida en que aumente o disminuya el valor de los sumandos que sirvieron para determinar su base de liquidación.

- **Ocupación de obras e instalaciones**

La base de liquidación estaría constituida por el valor de mercado de los bienes ocupados en el momento del otorgamiento de la concesión, considerando el uso previsto así como el plazo de otorgamiento. El importe del canon será el derivado de aplicar el 8 por 100 a dicha base de liquidación.

- **Ocupación del mar territorial** por obras e instalaciones destinadas a la investigación o explotación de recursos mineros y energéticos:



La cuantía del canon será de **una peseta (0,006 euros) por metro cuadrado de superficie ocupada**.

La superficie ocupada será la del polígono obtenido uniendo los puntos de anclaje, si se trata de sistemas flotantes, o los puntos más exteriores en planta de la plataforma o sus elementos de sustentación, en el caso de sistemas apoyados. En el supuesto de que por la autoridad marítima se establezca en torno a las obras o instalaciones medidas de protección, de limitación a la navegación o del fondeo, dichas áreas se considerarán incluidas en la superficie ocupada a efectos de canon.

La obligación de satisfacer el canon nace para los titulares de las concesiones o autorizaciones en el momento del otorgamiento de las mismas y de la aprobación de cada una de las revisiones efectuadas sobre dicho canon, por lo que, en principio, sería de aplicación a las concesiones de plantas eólicas marinas, siendo exigible anualmente y será satisfecho de una sola vez o en los plazos que se determinen en la correspondiente concesión o autorización.

## Tasas portuarias

El Título VII, Capítulo II, del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (en adelante, TRLPEMM), recoge el Régimen Económico de la Utilización del Dominio Público y de prestación de servicios portuarios, donde se establece la necesidad de que el sistema portuario se rija por el principio de autofinanciación.

Para ello, el artículo 161 del TRLPEMM define a las tasas portuarias<sup>2</sup> como aquéllas que son exigidas por la **utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público portuario** y por la prestación del servicio de señalización marítima.

Las principales tasas portuarias que componen el régimen económico portuario son las siguientes:

- a) **Tasa de ocupación**, por la ocupación privativa del **dominio público portuario**.
- b) **Tasa de actividad**, por el ejercicio en el demanio portuario de actividades comerciales, industriales y de servicios.
- c) **Tasas de utilización**, por la utilización especial de las instalaciones portuarias.
- d) **Tasa de ayudas a la navegación**, por la prestación del servicio de señalización marítima.

La delimitación de dominio público portuario se recoge en el artículo 67 del TRLPEMM, y aunque no define que se entiende por dominio público portuario, sí señala que bienes lo integran. A este respecto, son vienen integrantes del dominio público portuario estatal, los terrenos, obras, instalaciones portuarias fijas, así como los espacios de agua incluidos en la **zona de servicio** de los puertos. En todo caso, este dominio público portuario forma parte del dominio público marítimo terrestre<sup>3</sup> referido en el artículo 132.2 de la Constitución y regulado en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

La **zona de servicio** de cada puerto se define mediante Orden Ministerial de Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios. Esta delimitación determina en los puertos de titularidad estatal una zona de servicio que incluirá los espacios de tierra y de agua necesarios para el desarrollo de los usos portuarios.

Por tanto, la ocupación de espacios de dominio público portuario, en concreto por la parte

<sup>2</sup> El régimen jurídico aplicable a las tasas portuarias viene determinado por el propio RDL 2/2011 y, supletoriamente, por la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, así como por sus respectivas normas reglamentarias de desarrollo.

<sup>3</sup> El dominio público marítimo-terrestre ocupado por un puerto de competencia de una Comunidad Autónoma mantiene su titularidad estatal, si bien tiene la condición de adscrito a dicha Comunidad en virtud de lo establecido en los artículos 5 del TRLPEMM y 49 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

de las líneas de evacuación de eólica marina que transcurra por los espacios de tierra y de agua, podría devengar la correspondiente **Tasa de Ocupación**. Los elementos esenciales que configurarían la prestación patrimonial son:

- a) **Sujeto pasivo:** El obligado al pago de la tasa será el concesionario o el titular de la autorización que justifica dicha ocupación privativa.
- b) **Base imponible.** La base imponible de la tasa es el valor del bien de dominio público ocupado, establecido conforme a criterios de mercado. En este sentido, ha de diferenciarse, atendiendo a la naturaleza del bien objeto de ocupación, entre (i) los terrenos, (ii) las aguas del puerto y (iii) las obras o instalaciones.
- c) **Tipo de gravamen:** El tipo de gravamen anual aplicable a la base imponible a los efectos de establecer la cuota íntegra difiere en atención al bien demanial ocupado y a la actividad que se desarrolle en el dominio público ocupado.
- d) **Bonificaciones:** Para determinados supuestos se prevé la aplicación de bonificaciones a la cuota de la tasa de ocupación. Estas bonificaciones deberán de reflejarse en las condiciones de la concesión o autorización, previo cumplimiento de los requisitos fijados en cada uno de ellos. Asimismo, se prevé la aplicación de bonificaciones singulares que pueden ser establecidas por cada Autoridad Portuaria en particular al objeto de promover a competitividad y sostenibilidad económica y ambiental de la actividad portuaria.

En este sentido, con el objeto de impulsar actividades directamente conectadas a la descarbonización de la economía y a la adaptación al cambio climático, se introdujo una bonificación del 30 por ciento (artículo 182 del TRLPEMM) cuando el objeto concesional sea la fabricación industrial de elementos destinados a instalaciones **eólicas marinas**, pero en todo caso, habrá que estar al desarrollo normativo que derive de la aprobación de las correspondientes autorizaciones.

## El Impuesto Especial sobre la Electricidad

El Impuesto Especial sobre la Electricidad es un **tributo de naturaleza indirecta** regulado en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales (LIIEE) que recae sobre el consumo de electricidad y grava, en **fase única**, el suministro de energía eléctrica para consumo, entendiéndose por suministro de energía eléctrica tanto la prestación del servicio de peajes de acceso a la red eléctrica como la entrega de electricidad, así como el **consumo por los productores** de aquella electricidad generada por ellos mismos. Este impuesto grava el consumo de electricidad, ya haya sido producida por el propio consumidor o por un tercero y se aplica en todo el territorio español<sup>4</sup>.

El hecho imponible, regulado en el artículo 92 de la LIIEE establece que está sujeto al impuesto:

- El suministro de energía eléctrica a una persona o entidad que adquiere la electricidad para su propio consumo, entendiéndose por suministro de energía eléctrica tanto la prestación del servicio de peajes de acceso a la red eléctrica como la entrega de electricidad.
- A los efectos de este impuesto, siempre tendrán la condición de consumidores las personas físicas o jurídicas que adquieren la energía para la prestación de servicios de recarga energética de vehículos.
- El consumo por los productores de energía eléctrica de aquella electricidad generada por ellos mismos.

<sup>4</sup> Sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de concierto y convenio económico en vigor, respectivamente, en los Territorios del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra.



Para que la recepción de la energía eléctrica por parte del cliente, persona o entidad que adquiere la electricidad para su propio consumo, esto es el consumidor final, se produzca, es necesaria, como parte indisoluble de la operación de suministro, la utilización de una red de transporte o distribución por la que se satisface peaje.

El precio satisfecho por el peaje se considera una de las dos partes, junto con el precio pagado por la cantidad de energía eléctrica adquirida, que conforma el importe total de la contraprestación que el consumidor satisface por el suministro de energía eléctrica a su suministrador, generalmente un comercializador, y que, conforme a lo establecido en el artículo 97 de la LIIIE, configura la base imponible del Impuesto<sup>5</sup>.

El artículo 94 de la LIIIE regula las **exenciones**, resultado de aplicación, por lo que ahora nos ocupa, las siguientes:

- **Apartado 5:** La energía eléctrica consumida por los titulares de las instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología renovable, cogeneración y residuos cuya potencia instalada no supere los 50 megavatios (MW).

Esta exención es aplicable a la energía eléctrica producida en la instalación de producción de energía eléctrica de tecnología renovable, cogeneración y residuos cuya potencia instalada no supere los 50 MW, siempre y cuando sea consumida por los titulares de dicha instalación, con independencia de que el consumo de energía eléctrica se realice en la instalación en la que se produce electricidad o en otra diferente<sup>6</sup>.

Esta exención no se aplicará si la energía ha sido adquirida en el mercado, a la que, en su caso, podría resultarle de aplicación la exención del apartado 7 a la que pasamos a referirnos<sup>7</sup>.

- **Apartado 7:** La energía eléctrica consumida en las instalaciones de producción de electricidad para la realización de dicha actividad, así como la energía eléctrica suministrada a las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica para la realización en las mismas de estas actividades.

Esta segunda exención supone que la electricidad adquirida del mercado y suministrada, a las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica para la realización de las referidas actividades estará exenta en virtud del apartado 7.

Por tanto, en principio, la energía consumida por las plantas eólicas marinas para su propio funcionamiento debería estar exenta de este impuesto.

5 Consulta vinculante V1956-16: no está sujeta al Impuesto la entrega de energía eléctrica a un comercializador o distribuidor que no adquiere la electricidad para su propio consumo, sino que el hecho imponible del impuesto se producirá cuando la electricidad se entregue al consumidor final.

6 Consulta vinculante V1629-21.

7 Consulta vinculante V2275-15.

## 4. IMPOSICIÓN AUTONÓMICA

### Introducción

**E**l artículo 133 de la Constitución española señala que *“la potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante Ley”* y reconoce seguidamente que *“las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes”*.

Asimismo, el artículo 142 del mismo texto legal determina la necesidad de que las Haciendas locales dispongan de medios suficientes para el desarrollo de las funciones que la ley les atribuya y deberán nutrirse de tributos propios y de la participación en los del Estado o de las Comunidades Autónomas, lo que otorga facultades legislativas en materia tributaria a las Haciendas Locales en determinadas circunstancias y con ciertos límites, derivados principalmente de que se vayan a establecer y exigir tributos que son obligatorios conforme a la normativa de regulación del Régimen Local (Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Actividades Económicas o el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica) versus los impuestos potestativos, en los que será obligatoria la aprobación de una Ordenanza que regule los elementos configuradores de dichos tributos.

De este modo, el [poder legislativo del Estado](#) desde el punto de vista tributario es un [poder originario](#) mientras que el de las Comunidades Autónomas y las Haciendas locales es un poder derivado que deberá ser ejercido dentro de los límites constitucionales de reserva de ley y respeto a la distribución competencial.

Estos límites se extraen, en el caso de las Comunidades Autónomas, de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que determina que las Comunidades Autónomas no podrán crear tributos propios sobre hechos imponible ya gravados por el Estado o por los tributos locales. Asimismo, la citada norma impone a los [tributos propios autonómicos](#) (ver [Anexo I](#)) otros límites derivados de principios de territorialidad y de libre circulación de personas, mercancías y servicios.



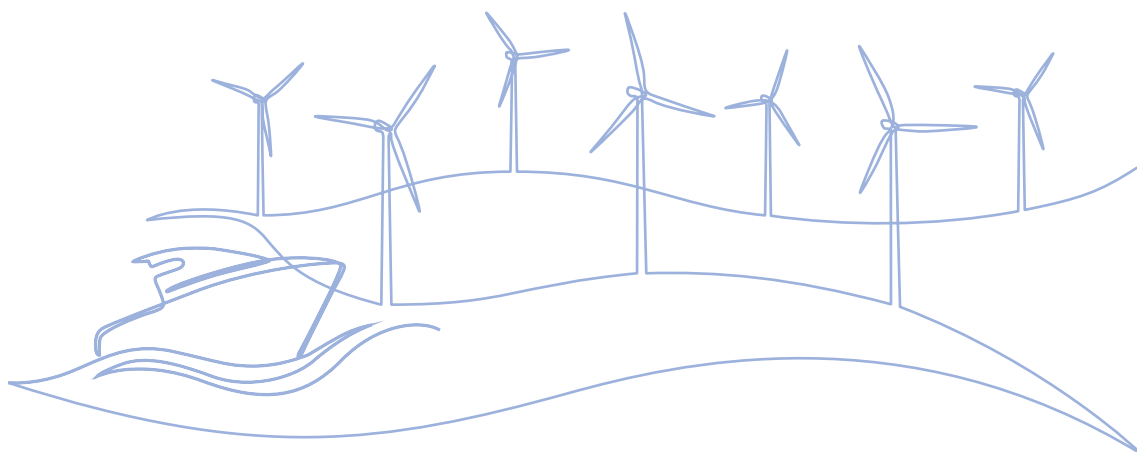
En particular, señala el artículo 6 de la citada norma que:

**“Artículo 6.**

*Uno. Las Comunidades Autónomas podrán establecer y exigir sus propios tributos de acuerdo con la Constitución y las Leyes.*

*Dos. **Los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas no podrán recaer sobre hechos impositivos gravados por el Estado.** Cuando el Estado, en el ejercicio de su potestad tributaria originaria establezca tributos sobre hechos impositivos gravados por las Comunidades Autónomas, que supongan a éstas una disminución de ingresos, instrumentará las medidas de compensación o coordinación adecuadas en favor de las mismas.*

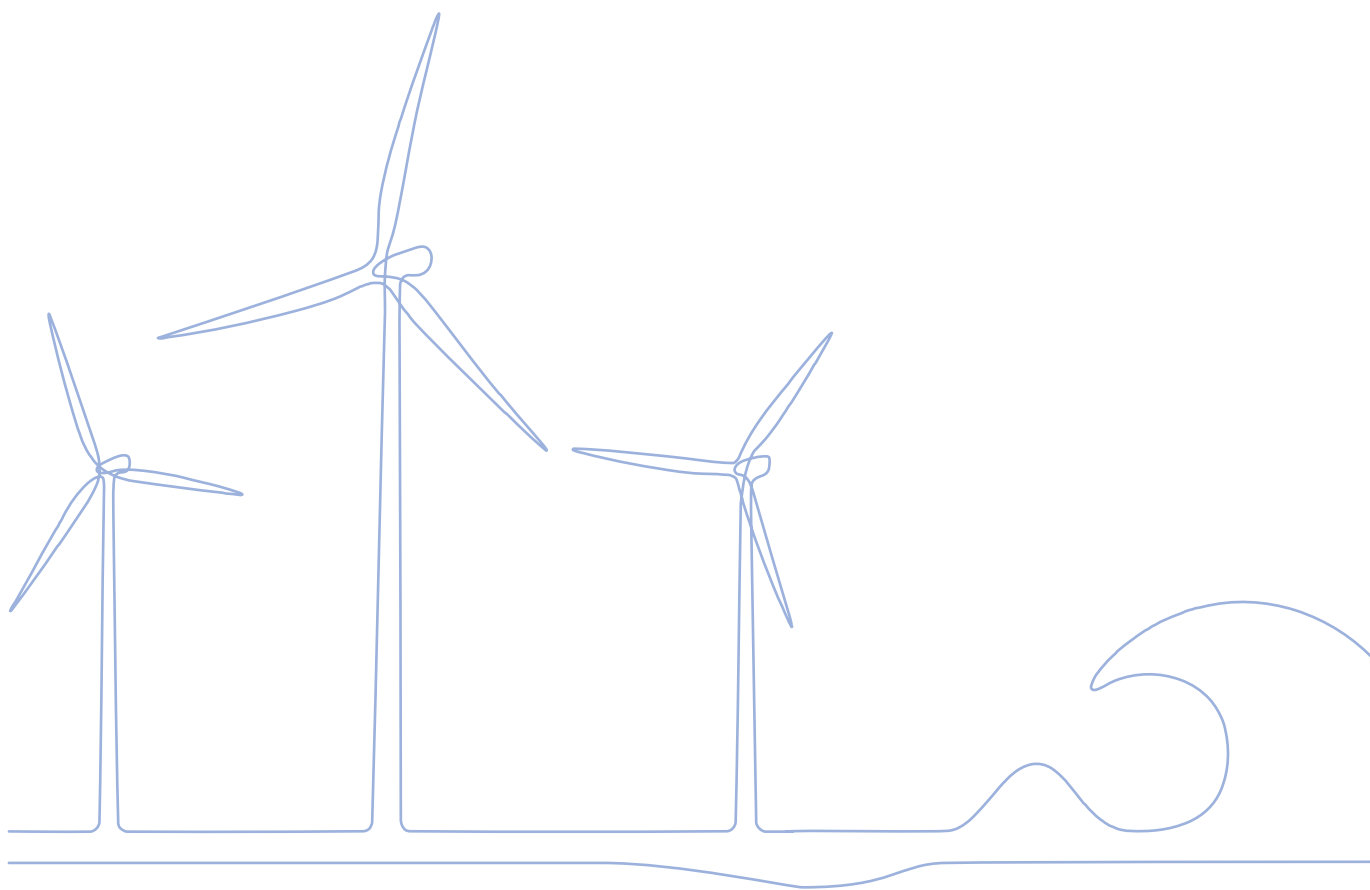
*Tres. **Los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas no podrán recaer sobre hechos impositivos gravados por los tributos locales.** Las Comunidades Autónomas podrán establecer y gestionar tributos sobre las materias que la legislación de Régimen Local reserve a las Corporaciones locales. En todo caso, deberán establecerse las medidas de compensación o coordinación adecuadas a favor de aquellas Corporaciones, de modo que los ingresos de tales Corporaciones Locales no se vean mermados ni reducidos tampoco en sus posibilidades de crecimiento futuro.”*



A la luz de la modificación de la redacción de la norma (que pretendía paliar las injerencias competenciales que se habrían denunciado constitucionalmente en casos de establecimiento de Impuestos de índole medioambiental por las Comunidades Autónomas balear o catalana en las Sentencias del Tribunal Constitucional 289/2000 y 168/2004, respectivamente), **el Estado podrá establecer tributos sobre hechos imponible gravados por las Comunidades Autónomas** (compensando la disminución de ingresos) **y las Comunidades Autónomas podrán fijar tributos que recaigan sobre materias imponible (no hechos imponible) gravadas por los entes locales** (con la subsiguiente compensación).

Un ejemplo de este modelo de corresponsabilidad fiscal (en la relación entre Comunidades Autónomas y Haciendas Locales) en el ámbito que estamos analizando es el **Canon por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional de suelo no urbanizable** creado por Comunidades Autónomas como Andalucía, Extremadura o Canarias y que se viene exigiendo con la concesión para explotar los parques eólicos o las huertas solares para gravar los actos de edificación, o construcción de obras o instalaciones no vinculadas a la explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga en suelos que tengan el carácter de no urbanizable. En estos casos, la normativa de creación procede de la Comunidad Autónoma mientras que los municipios tienen la competencia para recaudar y fijar los tipos de gravamen.

En este contexto de límites competenciales, las Comunidades Autónomas han debido buscar su espacio a la hora de fijar impuestos en las materias imponible que ya pudiesen estar gravadas por parte de los municipios. Habitualmente, dichas medidas se han pretendido dotar de un carácter medioambiental, por ejemplo, en los casos de creación de impuestos sobre la producción de electricidad que vulneran la doble imposición y responden a una finalidad exclusivamente recaudatoria al no tener naturaleza retributiva y referirse, en estos casos, al mismo hecho imponible del Impuesto sobre Actividades Económicas.



## Imposición Medioambiental

El artículo 148.1.9 de la Constitución española faculta a las Comunidades Autónomas para asumir competencias en la gestión en materia de protección del medio ambiente.

Por su parte, el apartado 3 del artículo 149 del mismo texto legal establece la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan asumir otras **competencias adicionales a las expuestas** y, por tanto, regular respecto de las mismas, al indicar que: *"Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas."*

Derivado directamente de esta norma y al albor de la atribución de competencias en relación con la protección del medio ambiente y del paisaje o los ecosistemas, las Comunidades autónomas de Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla-León fueron aprobando la normativa reguladora de determinadas **prestaciones de carácter público** que gravan el desarrollo de la actividad por los parques eólicos.

De acuerdo con ello, las normas aprobadas por las tres corporaciones autonómicas son:

- Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico de Galicia y se crean el canon eólico y el fondo de Compensación Ambiental.
- Ley 9/2011, de 21 de marzo, por la que se crea el canon eólico y el Fondo para el Desarrollo Tecnológico de las Energías Renovables y el Uso Racional de la Energía en Castilla-La Mancha.
- Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras (Castilla-León)

El nexo común de las citadas normas es establecer un canon eólico caracterizado por ser *"una prestación patrimonial pública de naturaleza finalista y extrafiscal, concebida como instrumento apropiado destinado a internalizar los costes sociales y ambientales mencionados y dirigido a estimular y promover la incorporación de nuevas tecnologías en los aerogeneradores"*.

Por su parte, la Exposición de Motivos de la Ley Castellano-leonesa determina que *"el denominado impuesto sobre la afección medio ambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión, se configura como un impuesto ambiental cuya finalidad es someter a gravamen determinadas actividades que ocasionan un importante daño al medio ambiente en el territorio de nuestra Comunidad Autónoma y cuya recaudación se destinará a financiar aquellos gastos de carácter ambiental y de eficiencia energética que se determinen en las correspondientes leyes anuales de presupuestos generales autonómicos"*.

Las principales características derivadas de la regulación de los citados cánones se adjuntan en el siguiente cuadro<sup>8</sup>:

	CÁNON EÓLICO		
	GALICIA	CASTILLA LA MANCHA	CASTILLA Y LEÓN
<b>OBJETO</b>	"Proteger el medio ambiente, para estimular la incorporación de las nuevas tecnologías en los aerogeneradores, para aminorar el número de éstos y para reforzar el equilibrio territorial"	"Preservar la cohesión, el equilibrio territorial y el medio natural, en cuanto entorno físico soporte de la actividad económica vinculada al aprovechamiento industrial del viento, en su consideración de bien jurídico protegido, y al objeto de contribuir al desarrollo de un modelo energético y económico sostenible"	"Protección del medio ambiente y de los ecosistemas, para contribuir a mitigar el cambio climático"
<b>HECHO IMPONIBLE</b>	"La generación de afecciones e impactos visuales y ambientales adversos sobre el medio natural y sobre el territorio, como consecuencia de la instalación en parques eólicos de aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica y situados en el territorio. Se entenderá producido el hecho imponible aunque la titularidad de los aerogeneradores no corresponda al titular de la autorización administrativa para la instalación"	"La generación de afecciones e impactos adversos sobre el medio natural y sobre el territorio, como consecuencia de la instalación en parques eólicos de aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica"	"La generación de afecciones e impactos visuales y ambientales por los parques eólicos y por los elementos fijos del suministro de energía eléctrica en alta tensión"
<b>EXENCIONES</b>		"Las destinadas al autoconsumo eléctrico." Las de carácter experimental y de investigación cuya potencia máxima no sea superior a 5 megavatios, siempre y que no constituyan un parque eólico en los términos previstos en el Decreto 20/2010, de 20 de abril, por el que se regula el aprovechamiento de la energía eólica en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha	"Las instalaciones y demás elementos patrimoniales afectos de los que sean titulares el Estado, la Comunidad de Castilla y León o las entidades locales de Castilla y León, así como sus organismos y entes públicos." Las instalaciones destinadas a investigación y desarrollo"
<b>PERIODO IMPOSITIVO</b>	Coincidirá con el año natural	Coincidirá con los trimestres de cada año natural	Coincidirá con el año natural

<sup>8</sup> Incorporamos la información correspondiente a estos cánones respecto de la eólica terrestre y el esquema de cálculo como indicativos de la posible implementación de un canon a la eólica marina en términos coincidentes al albor del desarrollo que pueda efectuarse desde el punto de vista competencial por el impacto del desarrollo de la actividad en el medio ambiente cuya regulación sea de competencia autonómica.

CÁNON EÓLICO			
	GALICIA	CASTILLA LA MANCHA	CASTILLA Y LEÓN
<b>SUJETO PASIVO</b>	<p>En calidad de contribuyentes: las personas físicas o jurídicas o entidades que bajo cualquier título, lleven a cabo la explotación de un parque eólico</p> <p>En calidad de responsables solidarios: los titulares de autorizaciones administrativas cuando quien lleve a cabo la explotación no sea el titular de la autorización o los titulares de los aerogeneradores cuando la titularidad no coincida ni con el titular de la explotación, ni con el de la autorización administrativa</p>	<p>En calidad de contribuyentes: las personas físicas o jurídicas o entidades que bajo cualquier título, lleven a cabo la explotación de un parque eólico</p> <p>En calidad de responsables solidarios: los titulares de autorizaciones administrativas cuando quien lleve a cabo la explotación no sea el titular de la autorización o los titulares de los aerogeneradores cuando la titularidad no coincida ni con el titular de la explotación, ni con el de la autorización administrativa</p>	<p>En calidad de contribuyentes: las personas físicas o jurídicas o entidades que bajo cualquier título, lleven a cabo la explotación de un parque eólico</p> <p>En calidad de responsables solidarios: los propietarios de las instalaciones que generen el hecho imponible cuando no coincidan con los que las exploten</p>
<b>BASE IMPONIBLE</b>	La suma de unidades de aerogeneradores existentes en un parque eólico, instalados en el territorio regional	La suma de unidades de aerogeneradores existentes en un parque eólico, instalados en el territorio regional	La suma de unidades de aerogeneradores existentes en un parque eólico, instalados en el territorio regional
<b>TIPO Y CUOTA</b>	<p>En parques eólicos entre 1 y 3 aerogeneradores: 0 euros/unidad</p> <p>En parques eólicos entre 4 y 7 aerogeneradores: 2.300 euros/unidad</p> <p>En parques eólicos entre 8 y 15 aerogeneradores: 4.100 euros/unidad</p> <p>En parques eólicos de más de 15 aerogeneradores: 5.900 euros/unidad</p> <p><small>*Primer año de explotación y último el tipo se prorrateará en función del número de días del periodo impositivo*</small></p>	<p>En parques eólicos hasta 2 aerogeneradores: 0 euros/unidad</p> <p>En parques eólicos entre 3 y 7 aerogeneradores: 489 euros/unidad</p> <p>En parques eólicos entre 8 y 15 aerogeneradores: 871 euros/unidad</p> <p>En parques eólicos de más de 15 aerogeneradores:</p> <p>a) Cuando el número de aerogeneradores sea igual o inferior a la potencia instalada medida en megavatios: 1.233 euros/unidad</p> <p>b) Cuando el número de aerogeneradores sea superior a la potencia instalada medida en megavatios: 1.275 euros/unidad</p> <p><small>*Primer trimestre de explotación, si es inferior al trimestre, la cuota resultante se prorrateará por meses completos</small></p>	<p>Cuando la potencia del aerogenerador sea menos de 501 Kw: 2.000 euros/unidad</p> <p>Cuando la potencia del aerogenerador sea entre 501 Kw y 1.000 Kw: 3.800 euros/unidad</p> <p>Cuando la potencia del aerogenerador sea entre 1.001 Kw y 1.500 Kw: 6.000 euros/unidad</p> <p>Cuando la potencia del aerogenerador sea entre 1.501 Kw y 2.000 Kw: 8.500 euros/unidad</p> <p>Cuando la potencia del aerogenerador sea más de 2.000 Kw: 12.000 euros/unidad</p> <p>El sujeto pasivo podrá reducir la cuota a ingresar en función del tiempo transcurrido entre el día de la puesta en funcionamiento y el día 1 de julio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menos de 1 año completo: reducción del 90%</li> <li>• Entre 1 año completo y menos de 2: reducción del 80%</li> <li>• Entre 2 años completos y menos de 3: reducción del 70%</li> <li>• Entre 3 años completos y menos de 4: reducción del 60%</li> <li>• Entre 4 años completos y menos de 5: reducción del 40%</li> <li>• Entre 5 años completos y menos de 6: 20%</li> </ul>
<b>BONIFICACIÓN</b>	En caso de un proyecto de modificación de parques preexistentes en funcionamiento que supongan una sustitución total o parcial de los aerogeneradores por otros de mayor potencia, dando lugar a una reducción de unidades de aerogeneradores que no suponga tramo diferente de base, la cuantía de la cuota que se debe de satisfacer, en el periodo que corresponde a la reducción, se bonificará en un porcentaje resultante de multiplicar por 10 el número de unidades reducidas.		



A la vista de lo anterior, lo primero que debe plantearse de cara a la posibilidad de las Comunidades Autónomas de fijar un tipo de prestación equivalente al canon eólico en el desarrollo de la actividad eólica marina es si la Comunidad ostenta [competencia sobre el mar territorial](#) y las características de los deslindes de cada zona en la que podrían ostentarse dichas competencias.

En relación con la organización territorial del Estado español, el artículo 137 de la Constitución española establece que la misma viene determinada por los municipios, provincias y Comunidades Autónomas, que gozarán de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses y el desarrollo de las competencias que le sean propias.

Por su parte, considerando que en el caso de la actividad de eólica marina su desarrollo se ubicaría en el mar, deberá acudirse a lo dispuesto en el artículo 132 apartado segundo del mismo texto legal, en el que se establece que: *"Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental."*

Esta delimitación efectuada por el **artículo 132** de la Constitución parecía determinar no sólo la titularidad, sino la exclusividad competencial en el ámbito del Dominio Público marítimo-terrestre, lo que derivó en que, ante el conflicto o choque de competencias con los entes autonómicos e incluso municipales, se pronunciara el Tribunal Constitucional en los siguientes términos:

*"(...) la condición de dominio público no es un criterio utilizado en nuestra Constitución para delimitar competencias. El concepto de dominio público sirve para calificar una categoría de bienes, pero no para aislar una porción de territorio de su entorno, y considerarlo como una zona exenta de las competencias de los diversos entes públicos que las ostenten" (STC 77/1984, de 3 de julio).*

A este respecto, es evidente que el territorio se configura como el elemento definidor de las competencias de los poderes públicos territoriales, pero del mismo modo, el Estado es titular de dependencias terrestres marinas parcialmente integradas en los términos municipales y en los territorios autonómicos, lo que tiene que derivar en un [obligado entendimiento](#).

Al amparo de la [asunción de competencias en el ámbito del medio ambiente](#), y de la defensa que han efectuado las Comunidades Autónomas de la legitimidad de su competencia más allá de la titularidad del DPMT, el artículo 114 de la Ley de Costas estableció que *"Las Comunidades Autónomas ejercerán las competencias que, en las materias de ordenación territorial y del litoral, puertos, urbanismo, vertidos al mar y demás relacionadas con el ámbito de la presente Ley tengan atribuidas en virtud de sus respectivos Estatutos"*.

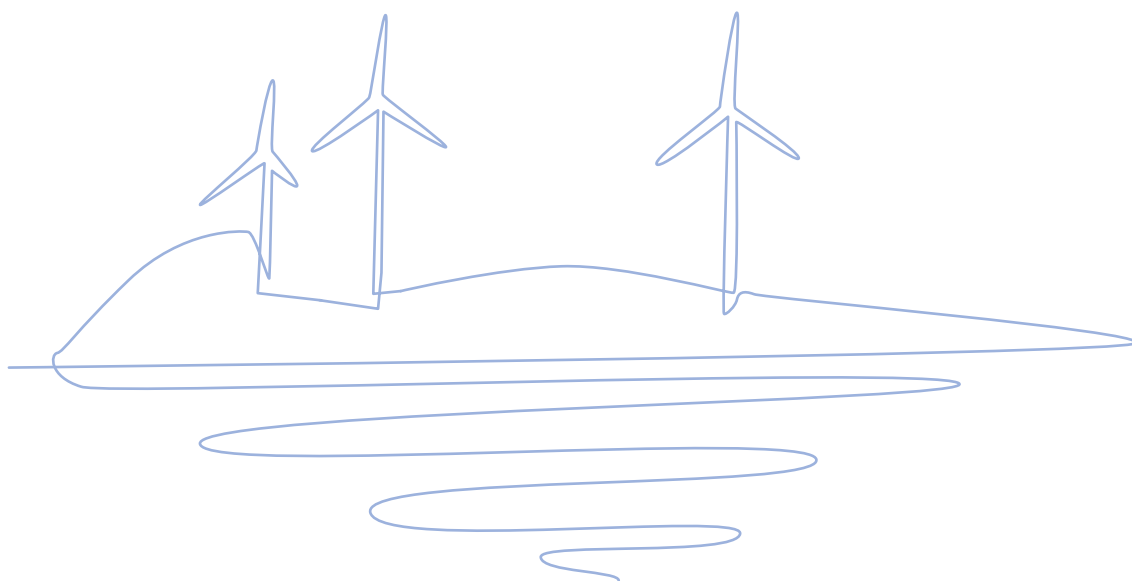
Precisamente ha sido a través de las modificaciones de los Estatutos de Autonomía cuando se ha producido una asunción cada vez mayor de facultades por parte de las Comunidades Autónomas en el ámbito de la ordenación del territorio, ampliación de competencias que ya ha sido avalada por el Tribunal Constitucional con ocasión del análisis de la *Ley 8/2020, de 30 de julio, regula la ordenación y la protección del litoral en el territorio de Cataluña y es aplicable a los bienes de dominio público y ecosistemas marítimo-terrestres del litoral*. De este modo, la STC 18/2022, de 8 de febrero vino a establecer que: *"esta competencia sobre la «gestión» de los títulos de ocupación del dominio público marítimo terrestre se integra en la competencia más amplia de ordenación del litoral. De acuerdo con el precepto estatutario, esta comprende «en todo caso» aquella (pero no solo), y como apostilla la STC 31/2010, FJ 92, «dado que» la Generalitat es competente en materia de ordenación del litoral, la gestión de los títulos no menoscaba la competencia del Estado sobre la protección del litoral derivada del art. 132.2 CE"*.



En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, como ya ocurriera en el caso de Andalucía o Cataluña, **se ha producido con efectos a 1 de enero de 2023 la transferencia de competencias de costas** entre las que se incluyen las de autorizaciones de dominio público, de las zonas de servidumbre o de concesiones demaniales en el ámbito del artículo 64 de la Ley de Costas, así como en obras y actuaciones en el litoral de Canarias, todo ello en virtud del Real Decreto 713/2022, de 30 de agosto, de traspaso de funciones y servicios de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de ordenación y gestión del litoral.

De este modo, y al albor de la ampliación del margen de actuación de la competencia de la Comunidad Autónoma, en el ámbito concreto de autorizaciones y establecimiento de instalaciones, no sólo en el mar territorial sino en lo que concierne a las instalaciones en el propio litoral de transporte de la energía eléctrica generada, no puede descartarse la aprobación de cánones o tasas equivalentes a las ya establecidas en la actividad de explotación eólica terrestre, pero que incluso amplíen el espectro del hecho imponible más allá de la protección del medio ambiente, para gravar específicamente actuaciones directas de la instalación física en el mar territorial concurrentes a las que puedan derivarse de la normativa estatal.

En consonancia con lo anterior, el 23 de marzo de 2023, el gobierno de la Xunta de Galicia ya habría anunciado el futuro establecimiento de un cánón que gravaría las **líneas eléctricas de evacuación** que conectarían los parques de eólica marina, una vez que lleguen a tierra, con las subestaciones eléctricas correspondientes, semejante al que existe en la eólica terrestre, con la finalidad de que la recaudación repercuta en los lugares donde efectivamente se establezcan las conexiones y en sectores como el pesquero, con el objetivo de garantizar la "coexistencia de recursos".<sup>9</sup>



<sup>9</sup> Fuente: Europapress Galicia publicado el 23 de marzo de 2023 <https://www.europapress.es/galicia/noticia-xunta-preve-fijar-ley-canon-eolica-marina-20230323134126.html>

## 5. IMPOSICIÓN LOCAL

Según se indicaba anteriormente, las Haciendas locales tienen **facultades de regulación fiscal derivadas directamente de la Constitución**, en particular, de la fijada por el artículo 142, de que deberán disponer de los medios suficientes para el desarrollo de sus competencias.

De este modo, el legislador estatal ostenta el poder legislativo originario y los tributos que puedan exigir las Haciendas locales se regulan mediante ley estatal, debiendo diferenciar los impuestos que, conforme al Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), son obligatorios (Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Actividades Económicas e impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica), que podrán ser exigidos sin la aprobación de ninguna Ordenanza, de aquellos que tienen carácter potestativo en cuanto a su establecimiento (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e Impuesto municipal sobre Gastos Suntuarios) así como para los demás tributos, tasas y contribuciones especiales en los que será preceptivo que sean regulados por las respectivas ordenanzas fiscales.

De acuerdo con lo anterior, la primera conclusión es que las Haciendas locales podrán establecer y fijar tributos, tasas y contribuciones especiales, en el marco de sus competencias y materias tributarias que les resultan de aplicación. Por tanto, en el ámbito de la actividad concreta que venimos analizando, con carácter general podrán exigirse tributos locales en el desarrollo de la actividad eólica, debiendo analizar seguidamente, las especificidades derivadas de la eólica marina.



El TRLHL establece en su **artículo 1** el ámbito de aplicación de dicha norma, estableciendo que:

- 1. Tienen la consideración de bases del régimen jurídico financiero de la Administración local, dictadas al amparo del artículo 149.1.18.<sup>a</sup> de la Constitución, los preceptos contenidos en esta ley, con excepción de los apartados 2 y 3 del artículo 186, salvo los que regulan el sistema tributario local, dictados en virtud de lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución y los que desarrollan las participaciones en los tributos del Estado a que se refiere el artículo 142 de la Constitución; todo ello sin perjuicio de las competencias exclusivas que corresponden al Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.<sup>a</sup> de la Constitución.*
- 2. Esta ley **se aplicará en todo el territorio nacional**, sin perjuicio de los regímenes financieros forales de los Territorios Históricos del País Vasco y Navarra.*
- 3. Igualmente, esta ley se aplicará sin perjuicio de los tratados y convenios internacionales.*

En cuanto a la delimitación territorial del Estado, los artículos 11 y 12 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local define el municipio como la entidad local básica del Estado, constituyendo sus elementos el territorio, la población y la organización, y delimitando el ámbito competencial de los ayuntamientos.

La circunscripción territorial del municipio viene confirmada asimismo por el artículo 1 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio de 1986, equiparando el término municipal como el **territorio en el que el Ayuntamiento ejerce sus competencias**.

De este modo, en relación con el ámbito de actuación directa en el mar territorial, **los entes municipales no tendrían competencia, reservada constitucionalmente, según se ha indicado, al Estado.** No obstante, en el desenvolvimiento de otras competencias transferidas a las Comunidades Autónomas o las propias del municipio, que conlleven la ordenación o afectación a su territorio, el municipio podría ver ampliado su margen de maniobra, como podría ocurrir en el desarrollo de actividades que afecten a los litorales o incluso, en el ámbito de las competencias sobre el respeto y protección del medio ambiente.

De acuerdo con ello, a continuación se analiza cómo podría afectar al desarrollo de la actividad de la eólica marina los distintos tributos que la Ley reguladora de Haciendas Locales faculta exigir a los Ayuntamientos así como otras figuras tributarias o no, que pudieran resultar igualmente de aplicación. Todo ello sin perjuicio de la configuración competencial que derive tanto de la aprobación de los instrumentos de ordenación como del resto de normativa que resulte de aplicación y partiendo de la premisa, según se ha indicado, de que la competencia legislativa sobre el mar territorial estaría reservada al Estado, como su titular, según se habría reseñado y corrobora la propia Dirección General de Tributos en la Consulta vinculante de 28 de septiembre de 2006 (CV nº 1932-06).

## Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de categorías especiales.

**E**l Impuesto sobre Bienes Inmuebles (en adelante, IBI), regulado en los artículos 60 a 77 del TRLHL, es un tributo directo de carácter real que **grava la titularidad** de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos (y **sobre los inmuebles de características especiales** (en lo sucesivo, BICEs):

- a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.
- b) De un derecho real de superficie.
- c) De un derecho real de usufructo.
- d) Del derecho de propiedad.

La realización de un hecho imponible, en el orden de prelación, determinará la no sujeción a las restantes modalidades; si bien en los inmuebles de características especiales, cuando los derechos de concesión que puedan recaer sobre el inmueble no agoten su extensión superficial, también se realizará el hecho imponible por el derecho de propiedad sobre la parte del inmueble no afectada por una concesión.

La **base imponible** estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario, siendo precisamente dicha norma la que delimita el concepto de Bien Inmueble de características especiales. Por su parte, el **tipo de gravamen** aprobado por cada Ayuntamiento podrá oscilar entre el 0,4 y el 1,3% (en el ámbito de los BICEs), sobre el valor catastral atribuido al bien, sin perjuicio de las reducciones y bonificaciones previstas por la norma a las que pudieran acogerse cada Corporación local.

Considerando la delimitación del hecho imponible, es evidente que el desarrollo de una instalación de eólica no devengaría el Impuesto sobre Bienes Inmuebles en la modalidad general, sin embargo, este tipo de instalaciones ha quedado gravado en la categoría de bienes inmuebles de características especiales, al amparo de lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. Señala la citada norma que:

*"1. Los bienes inmuebles de características especiales constituyen un conjunto complejo de uso especializado, integrado por suelo, edificios, instalaciones y obras de urbanización y mejora que, por su carácter unitario y por estar ligado de forma definitiva para su funcionamiento, se configura a efectos catastrales como un único bien inmueble.*

*2. Se consideran **bienes inmuebles de características especiales** los comprendidos, conforme al apartado anterior, en los siguientes grupos:*

**a) Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y al refino de petróleo, y las centrales nucleares.**

*b) Las presas, saltos de agua y embalses, incluido su lecho o vaso, excepto las destinadas exclusivamente al riego.*

*c) Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.*

*d) Los aeropuertos y puertos comerciales.*

*3. A efectos de la inscripción de estos inmuebles en el Catastro y de su valoración no se excluirá la maquinaria integrada en las instalaciones, ni aquella que forme parte físicamente de las mismas o que esté vinculada funcionalmente a ellas."*

En el artículo 7 del Real Decreto 1464/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración catastral de los bienes inmuebles de características especiales, se establece que "el valor catastral de los bienes inmuebles de características especiales se obtendrá mediante la **suma del valor del suelo y del valor de las construcciones** determinados conforme a lo establecido en este real decreto, sin perjuicio de la aplicación del coeficiente de referencia al mercado correspondiente a esta clase de inmuebles." El coeficiente corrector de referencia al mercado para los bienes inmuebles de características especiales se establece en un 0,5 mediante la Orden HAC/3521/2003, de 12 de diciembre.

De acuerdo con la información expuesta, la fijación de un gravamen local por este concepto tendría un doble impedimento, derivado, en primer término, del competencial, en la medida en que el aerogenerador se ubicaría en un espacio (mar territorial), cuya competencia normativa en cuanto a su ordenación estaría atribuida al Estado.

Por su parte, el otro obstáculo que podría afrontar el ente público local para pretender exigir el tributo por la parte de la instalación o cableado que, ya en el litoral, permitiese efectuar el suministro de la energía, vendría determinado por la propia delimitación del "bien de características especiales".

Por un lado, porque desde el punto de vista conceptual el aerogenerador no podría delimitarse como bien inmueble a efectos de la definición del objeto tributario gravado, ya que incluso aunque estemos ante un bien de características especiales, la definición actual contenida en la normativa específica del catastro parte de la premisa de que se trate de un bien inmueble, delimitación que no parece poder aplicarse al aerogenerador en el ámbito de la eólica marina.

Asimismo, vinculado con lo anterior, incluso aunque se modificase la delimitación del bien inmueble de características especiales, o de la definición en cuanto al carácter de bien inmueble, puesto que la norma se refiere "a un conjunto complejo y que de carácter unitario esté ligado de forma definitiva para su funcionamiento", la actividad gravada consistente en la "producción de energía" en el caso de la eólica marina, no permitiría determinar tampoco que en el ámbito territorial local se estuviese desarrollando dicha actividad (sin perjuicio de que pudiera afectar a las entidades que realizaran la de transporte<sup>10</sup>).

<sup>10</sup> A estos efectos, el artículo 21.5 de la Ley 24/2013, de 26 diciembre, del Sector Eléctrico, establece que "Formarán parte de la instalación de producción sus infraestructuras de evacuación, que incluyen la conexión con la red de transporte o de distribución, y en su caso, la transformación de energía eléctrica"

# Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)

**E**l Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto (artículo 78 a 91 de TRLHL).

De la definición anterior se desprenden las siguientes notas:

- El hecho imponible se realiza por el mero ejercicio de cualquier actividad económica, incluidos cualquier hecho aislado, sin que sea necesaria la habitualidad y se realiza con independencia de que exista o no beneficio en el ejercicio de la actividad, y exista o no ánimo de lucro.
- Se grava el ejercicio de actividades realizadas en territorio nacional.
- Se gravan actividades con independencia de que éstas se realicen o no en un local determinado.
- El hecho imponible se realiza independientemente de si la actividad es principal o secundaria.
- El impuesto grava toda clase de actividades se hallen o no especificadas en las Tarifas.

Cada Ayuntamiento determinará la cuota por este tributo, partiendo de las tarifas del impuesto, en las que se fijarán las cuotas mínimas, así como la Instrucción para su aplicación se regulan en el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.

En el ámbito concreto de la energía eólica, las entidades locales en su potestad de aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos propios podrán acordar la aplicación de una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota del IAE para aquellos sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración (artículo 88.2.c TRLHL).

A estos efectos, tienen la consideración de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables las instalaciones eólicas de acuerdo con lo dispuesto en el Plan de Fomento de las Energías Renovables.

La Consulta Vinculante V0957-20 de la Dirección General de Tributos determinó que: *"De conformidad con lo establecido en los referidos artículos 78.1, 79.1 y 80 del TRLRHL, por la actividad de producción de energía eólica y fotovoltaica", clasificada en el epígrafe 151.4, "Producción de energía no especificada en los epígrafes anteriores, abarcando la energía procedente de mareas, energía solar, etc.", de la sección primera de las Tarifas, la entidad consultante deberá darse de alta en el IAE, y comenzar a tributar por este impuesto, cuando inicie de modo efectivo esta actividad económica, es decir, cuando inicie la producción de energía eólica o fotovoltaica."* El epígrafe anterior fija la cuota por cada kW de potencia en generadores en 120 pesetas (0,721215 euros).

A la vista de lo anteriormente expuesto, podría concluirse que en la medida en que la instalación física del aerogenerador tiene lugar en el mar territorial, **el ente local no tendría competencia para exigir el abono del tributo.**

Asimismo, representaría un obstáculo para establecer la imposición de la actividad de producción de energía por parte del ente local por el Impuesto sobre Actividades Económicas, la propia delimitación del Impuesto y, en particular, la descripción de la tarifa correspondiente al epígrafe 151.4, que, según se habría indicado, grava **la producción de energía**, de hecho, la cuantificación de **la cuota tributaria se determina aplicando un importe respecto de cada kW producido.**

De este modo, con la configuración actual del tributo, debe entenderse que técnicamente la producción de energía tiene lugar en el aerogenerador, y en todo caso dentro de la torre ubicada en mar territorial, lo que nuevamente nos conduciría a concluir que, para este epígrafe concreto, la actividad estaría fuera del ámbito del hecho imponible.

Respecto de la actividad que consistiera en el transporte o comercialización de dicha energía y que pudiera tener lugar en el litoral, sí podría ostentar competencia el ente local, pero ya en el ámbito de otros epígrafes como el correspondiente a "transporte y distribución de energía eléctrica" (epígrafe 151.5).

## Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)

**E**l Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (en adelante, ICIO) es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se **exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística**, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al ayuntamiento de la imposición.

El hecho imponible vendría delimitado por las siguientes notas:

- Es necesario que se realice una construcción, instalación u obra.
- La referida obra debe requerir licencia urbanística o de obras, o declaración responsable o comunicación previa.
- No es necesario, sin embargo, que se obtenga o solicite dicha licencia, basta con que legalmente sea exigible o declaración responsable o comunicación previa.
- La competencia se atribuye al Ayuntamiento competente para el otorgamiento de la licencia urbanística o para realizar la actividad de control.

En este sentido, la instalación de un parque eólico marino, por la parte de la obra que se desarrolla en mar territorial, no precisa de licencia de obras o urbanística, toda vez que es una obra que se asienta en dominio público marítimo-terrestre, fuera de la competencia de los Ayuntamientos para el otorgamiento de las autorizaciones pertinentes, por lo que, en definitiva, **cuando no existe competencia municipal en orden a la concesión de la licencia pertinente, no estará sujeto al ICIO**.

Mención especial merece la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de octubre de 2022, por la que se ha declarado la inconstitucionalidad de una norma canaria que extendía el hecho imponible del ICIO a un supuesto no previsto por el legislador estatal.

Se trata del último inciso del apartado 4 del artículo 6 bis de la Ley del Parlamento de Canarias 11/1997, en la redacción dada por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2011, mediante la cual se extendía el hecho imponible del ICIO a supuestos en los que el control urbanístico de las obras correspondía a la Comunidad Autónoma de Canarias, en lugar de a los Ayuntamientos (como prevé la normativa estatal). Según el Tribunal, la norma autonómica invadía la competencia exclusiva del Estado para la regulación de los tributos propios de los entes locales, lo que, en principio, debería confirmar la interpretación efectuada para impedir el que pretenda gravarse por el Ayuntamiento la parte de construcción realizada en tierra.



## Tasa por el Otorgamiento de Licencia Urbanística

Las entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de prestación de servicios o de realización de actividades administrativas de competencia local, y en particular, por el otorgamiento de las licencias urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y ordenación urbana o realización de las actividades administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o comunicación previa (artículo 20.4.h TRLHL).

El hecho imponible consiste en la realización de la actividad administrativa tendente a verificar si los actos de edificación y uso del suelo se adecúan o no a la normativa urbanística, así como a la tramitación y expedición de la correspondiente licencia. Por lo tanto, se trata de un tributo distinto del ICIO, cuyo hecho imponible, está constituido por la realización de cualquier construcción, instalación y obra.

El TRLHL no regula los métodos de determinación de la base imponible de las tasas por prestación de servicios o realización de actividades administrativas, así como la cuantía de las mismas, sino que se remite a lo dispuesto en las respectivas ordenanzas fiscales, estableciendo un único límite en el artículo 24.2 por el cual, el importe de dichas tasas no puede exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida.

En cuanto a la determinación de la cuota tributaria, la LRHL también se remite a lo que establezca la respectiva ordenanza fiscal, que puede aprobar (i) una tarifa por la que se determine la cuota, (ii) una cantidad fija para cada presupuesto de hecho o (iii) la aplicación conjunta de ambos procedimientos.

En tanto no se realice ninguna actividad que requiera el otorgamiento de licencia municipal esta tasa no se devengaría.

## Tasa por ocupación o aprovechamiento del dominio público local

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20, apartado 1, del TRLHL, las entidades locales podrán establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local. De acuerdo con ello, reitera su apartado 3 que las entidades locales “*podrán establecer tasas por cualquier supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local*”, citando, entre otros, a título ejemplificativo, los siguientes:

- Apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos de uso público local, inclusive carreteras, caminos y demás vías públicas locales, para la instalación y reparación de conducciones y otras instalaciones, así como cualquier remoción de pavimento o aceras en la vía pública.
- Ocupación del subsuelo de terrenos de uso público local.
- Ocupación del vuelo de toda clase de vías públicas locales.
- Tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía eléctrica, incluidos los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, transformadores, etc., que se establezcan sobre vías públicas u otros terrenos de dominio público local o vuelen sobre ellos.



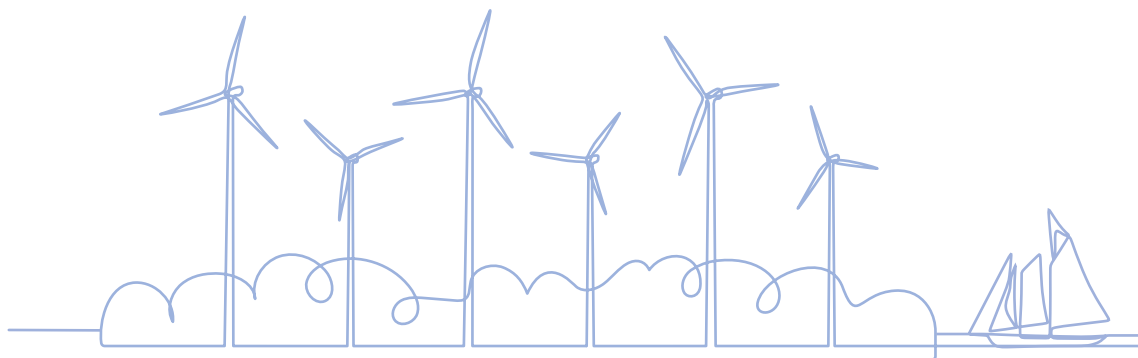
Por su parte, el artículo 23 del TRLHL califica como sujetos pasivos de la Tasa, en concepto de contribuyentes, a las personas físicas y jurídicas, así como a las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, "LGT"), *"que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo 20.3 de esta ley"*.

Por lo que se refiere a la cuantificación de la Tasa, se regula en el artículo 24 del TRLHL, el cual establece, en lo que aquí nos interesa, las siguientes reglas para su cálculo:

- a) Una regla general, regulada en el apartado 1.a), según la cual la tasa debe calcularse *"tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio público. A tal fin, las ordenanzas fiscales podrán señalar en cada caso, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, los criterios y parámetros que permitan definir el valor de mercado de la utilidad derivada."*
- b) Una regla especial, regulada en el apartado 1.c), aplicable a las tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario. Se comprenden dentro de la categoría de empresas explotadoras de servicios de suministros a las empresas distribuidoras y comercializadoras de estos, tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de las cuales se efectúan los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión.

En estos supuestos, la Tasa se cuantifica en el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal las empresas. Se entiende por ingresos brutos procedentes de la facturación aquellos que, siendo imputables a cada entidad, hayan sido obtenidos por esta como contraprestación por los servicios prestados en cada término municipal, excluyéndose, a estos efectos:

- (i) Los impuestos indirectos que graven los servicios prestados.
- (ii) Las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que no constituyan un ingreso propio de la entidad a la que se aplique el régimen especial de cuantificación de la Tasa.
- (iii) Las cantidades percibidas por servicios de suministro que vayan a ser utilizados en aquellas instalaciones que se hallen inscritas en la sección 1ª o 2ª del Registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica del Ministerio de Economía, como materia prima necesaria para la generación de energía susceptible de tributación por este régimen especial.



El establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local debe realizarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado (artículo 25 del TRLHL), siendo preceptiva la aprobación de la ordenanza fiscal correspondiente para su regulación (artículos 15 a 17 del TRLHL).

De acuerdo con lo anterior, los municipios que pretendan exigir la Tasa deberán aprobar la ordenanza fiscal correspondiente, previo el informe técnico-económico necesario para justificar la cuantificación de la misma.

Precisamente en uso de la facultad conferida por el citado artículo 20 del TRLHL a las entidades locales, los Ayuntamientos han aprobado Ordenanzas municipales reguladoras de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local a través de instalaciones de transportes y [distribución de energía eléctrica constituidas sobre el suelo, subsuelo o vuelo municipal](#), que:

- Suelen establecer una Tasa que recae sobre la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público realizado por empresas en las que no concurren las circunstancias de ser empresas suministradoras de servicios de interés general que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario y que ocupen el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales a las que se refiere el artículo 24.1.c) del TRLHL.
- Siendo, normalmente, el hecho imponible la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local mediante la instalación sobre su suelo, subsuelo o vuelo de [todos los elementos indispensables para el transporte y distribución de energía eléctrica \(cajas de amarre, torres metálicas, transformadores, etc.\)](#), entendiéndose por dominio público local *"todos los bienes de uso, dominio o servicio público que se hallen en el término municipal, y bienes comunales, exceptuándose los bienes patrimoniales"*.
- Son sujetos pasivos de la Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la LGT, que disfruten, utilicen o aprovechen el dominio público local, en beneficio particular conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo anterior, para realizar la actividad de transporte y distribución de energía eléctrica.

Pues bien, el artículo 21 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, establece en su apartado 5 que *"Formarán parte de la instalación de producción sus infraestructuras de evacuación, que incluyen la conexión con la red de transporte o de distribución, y en su caso, la transformación de energía eléctrica"*.

De esta manera, en la medida en que las infraestructuras de evacuación que se realicen en tierra y, por tanto, en el ámbito territorial de los municipios formen parte de la instalación de producción y no de la red de distribución o transporte, no estarían gravadas por esta Tasa siempre que la misma se configure por los Ayuntamientos como un tributo que grave el transporte y la distribución de la energía eléctrica.

Obviamente, lo anterior no impide que los Ayuntamientos afectados<sup>11</sup> cuyo dominio público esté siendo utilizado o aprovechado por una planta de producción eólica marina pueda aprobar otra Ordenanza que grave la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, por ejemplo, mediante instalaciones que sirvan para la producción y venta de energía eléctrica. Si así fuera el caso, habría que analizar el contenido de la Ordenanza aprobada para determinar su legalidad y la de las liquidaciones emitidas a su amparo.

<sup>11</sup> Debe considerarse que la potestad de gravar mediante una tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local no la disfrutaban únicamente las entidades locales, sino también cualquier otra Administración Pública (ya sea una comunidad autónoma o el propio Estado) cuyo dominio público sea utilizado o aprovechado por una entidad lo que podría dar lugar a la exacción de este tipo de tributos por distintas Administraciones, siempre que, en consideración a los principios constitucionales.

## Cánones por prestaciones compensatorias en el ámbito local

**T**al y como se indicaba con anterioridad, determinadas Comunidades Autónomas -entre otras, Andalucía, Extremadura o Canarias- habían venido creando un **canon por utilización de suelo no urbanizable** denominado prestación compensatoria que gestionan los municipios.

La finalidad de este canon es que se produzca la necesaria compensación por el uso y aprovechamiento excepcional del suelo no urbanizable, que conllevarían actuaciones tales como la concesión para explotar un parque eólico o solar. Según la normativa autonómica, esta prestación compensatoria tiene por objeto gravar los actos de edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculados a la explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, en suelos que tengan el régimen de no urbanizable y quedan obligados a su pago los que promuevan actos de autorización y concesión pertinentes y se devengará con ocasión del otorgamiento de la licencia.

El importe de estas prestaciones o cánones puede ser de una cuantía de hasta el 10 % del importe total de la inversión a realizar para su implantación efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos. Son los municipios los que podrán establecer mediante la correspondiente ordenanza cuantías inferiores según el tipo de actividad y condiciones de implantación.

La configuración actual de este tipo de prestaciones públicas que se está realizando en relación con la actividad eólica no permitiría gravar la eólica marina, nuevamente por la falta de competencia de los entes locales. Es evidente que el desarrollo de la actividad a una distancia relativamente corta del litoral va a determinar que los municipios que consideren afectados sus intereses jurídicos o económicos, pretendan compensar dichas circunstancias con la aprobación de este tipo de cánones.



# 6. DESCRIPCIÓN RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS

## Introducción

Desde la integración de España en la Unión Europea en 1986, Canarias ha tenido un tratamiento diferenciado derivado de su pertenencia al conjunto de las denominadas "Regiones Ultraperiféricas", que le ha permitido contar con una base jurídica, sólida y estable, para la fijación de un tratamiento diferenciado en su favor en materia de política aduanera y comercial, política fiscal, zonas francas, la política agrícola y pesquera, las condiciones de abastecimiento de materias primas y de bienes de consumo esenciales, las ayudas públicas y las condiciones de acceso a los fondos estructurales y a los programas horizontales de la Unión (artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea).

Dichas medidas tratan de paliar las dificultades que pueden lastrar su desarrollo socioeconómico tales como la lejanía, insularidad, la reducida superficie, su compleja orografía, la dependencia económica de un reducido número de productos, etc. Parten del marco conceptual establecido por el Reglamento n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.

En el ámbito concreto de la política económica y fiscal, la regulación estatal de dicho régimen especial se efectúa mediante la aprobación de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que articula las bases económicas de las especificidades derivadas de la aplicación de los tributos del Régimen Económico Fiscal de Canarias (en adelante, REF).

Los incentivos fiscales derivados del REF tienen la consideración de [Ayudas de Estado](#), a efectos comunitarios, y desde el 1 de enero de 2015, por primera vez en la normativa del REF, se incluyeron determinadas normas encaminadas a controlar la adecuación en la aplicación de sus incentivos fiscales a la normativa comunitaria, así como a regular algunas consecuencias de su incumplimiento: [inaplicación](#) de los beneficios fiscales cuando concurren ayudas de Estado ilegales e incompatibles.

De este modo, se estableció una nueva obligación por la que los beneficiarios de las mismas deben presentar una declaración informativa especial relativa a las distintas medidas o regímenes de ayudas utilizadas: [Modelo 282](#).

Los [sectores a los que se dirigen estos instrumentos del REF](#) son todos los existentes en la economía del Archipiélago. Esta cuestión planteaba cierta dificultad puesto que el Reglamento n.º 651/2014, en su art.1.3, excluía al sector de la pesca y la acuicultura (letra a) y al transporte y a la energía (letra e) en relación con el art.13 a). Estas dificultades se salvaron inicialmente con una carta de la Comisión Europea de 4 de marzo de 2015, que confirmaba la aplicación del REF a todos los sectores, explicitándose en modificaciones ulteriores en el propio articulado del Reglamento n.º 651/2014), que permite las ayudas regionales de inversión y funcionamiento para las RUP en todos estos sectores.



## Tipos de ayudas: Ayudas a la inversión

Ayudas regionales concedidas para una **inversión inicial** (artículo 6.b Reglamento n.º 651/2014), esto es, para:

- La creación de un nuevo establecimiento.
- La ampliación de la capacidad de un establecimiento existente.
- La diversificación de la producción de un establecimiento en productos que anteriormente no se producían en el mismo.
- La transformación fundamental del proceso global de producción de un establecimiento existente o, la adquisición de activos pertenecientes a un establecimiento que ha/habría cerrado si no hubiera sido adquirido.

Se **acumulan** las ayudas correspondientes a un mismo proyecto de inversión, sin que resulte procedente su división artificial, y las correspondientes a distintos proyectos de inversión, pero relativas a los mismos costes subvencionables (artículo 37.2 Reglamento n.º 651/2014)

Estas ayudas tienen determinados **umbrales de notificación**, en los términos establecidos en el Reglamento n.º 651/2014 que se aplican a los incentivos fiscales del REF, y **límites** que para las regiones ultraperiféricas pueden ser designadas por los Estados miembros como subvencionables en virtud del artículo 107, apartado 3, letra a), del TFUE (las denominadas zonas «a»). En España, la región ultraperiférica de Canarias seguirá siendo subvencionable como zona «a».

De acuerdo con el nuevo Mapa de ayudas (Real Decreto 622/2022, de 26 de julio) los **incentivos regionales en Canarias** no podrán sobrepasar el porcentaje máximo sobre la inversión aprobada del:

- **50% para grandes empresas.**  
30% (general, en función del PIB regional) + 20% (para regiones ultraperiféricas con un PIB igual o inferior al 75% de la media comunitaria).
- 60% para medianas empresas (incremento 10%):  
Mediana empresa: cifra de negocios <50M euros; n.º personas <250; balance general <43M€.
- 70% para pequeñas empresas (incremento 20%):  
Pequeña empresa: cifra de negocios <10M euros; n.º personas <50; balance general <10M€.

## Tipos de ayudas: Ayudas al funcionamiento

Las Ayudas al funcionamiento están concebidas para reducir los gastos corrientes de una empresa no relacionados con una inversión inicial (art. 6. a Reglamento N° 651/2014) o inversiones de sustitución.

Se acumulan con el resto de las ayudas percibidas por el proyecto o inversión tomando en consideración el periodo impositivo del Impuesto sobre Sociedades o del IRPF y estarán sujetas al **límite conjunto del 30% del volumen de negocios anual** del beneficiario obtenido en las islas Canarias.

### Acumulación de ayudas:

- **Ayudas regionales al funcionamiento:** como hemos visto, son de aplicación los límites establecidos en la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 15/2014, de 19 de diciembre: 30% de su volumen del volumen de negocio en Canarias.
- **Ayudas regionales a la inversión:** como se ha señalado, son de aplicación los límites establecidos en las DAR para 2022-2027 (2021/C 153/01), el Reglamento (UE) n.º 651/2014, y el resto del Ordenamiento comunitario aplicable, en su caso, en materia de ayudas estatales.

### Ámbito territorial

La Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias articula las bases económicas de las especificidades derivadas de la aplicación de los tributos del Régimen Económico Fiscal de Canarias (en adelante, REF). La citada norma no delimita el **ámbito espacial de los incentivos fiscales del REF**.

Por su parte, el **artículo 3 de la Ley 20/1991**, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias señala lo siguiente con relación a su ámbito espacial:

*"1. Estarán sujetas al Impuesto General Indirecto Canario las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en las Islas Canarias, así como las importaciones de bienes en dicho territorio.*

*A los efectos de este Impuesto, el ámbito espacial a que se refiere el párrafo anterior comprenderá el mar territorial, cuyo límite exterior está determinado por una línea trazada de modo que se encuentre a una distancia de doce millas náuticas de los puntos más próximos de las líneas de base, siguiendo el perímetro resultante la configuración general del Archipiélago; también comprende el ámbito espacial del Impuesto el espacio aéreo correspondiente.*

*2. Lo dispuesto en el número anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en los Tratados o Convenios Internacionales".*

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Canarias, en su artículo 4 relativo al ámbito espacial señala lo siguiente:

*"(...) 2. Sin perjuicio de la delimitación de las líneas de base existentes, entre los puntos extremos más salientes de las islas e islotes que integran, según el apartado anterior el Archipiélago canario, se trazará un contorno perimetral que siga la configuración general del archipiélago, tal como se establece en el anexo de este Estatuto. Las aguas que queden integradas dentro de este contorno perimetral recibirán la denominación de aguas canarias y constituyen el especial ámbito marítimo de la Comunidad Autónoma de Canarias (...)"*

*5. El trazado del contorno perimetral no alterará la delimitación de los espacios marítimos de las Islas Canarias tal y como están establecidos por el ordenamiento jurídico español en virtud del Derecho Internacional vigente".*

Considerando que la Disposición Adicional Octava de la Ley 19/1994 del REF se remite al régimen jurídico vigente para el territorio nacional en lo no previsto por la normativa reguladora específica, en el ámbito específico de la tributación directa de las sociedades mercantiles deberemos acudir al artículo 2.1 de la Ley 27/2014, mencionada anteriormente, en la que se estableció específicamente que el Impuesto sobre Sociedades se aplicará en todo el territorio español que "comprenderá aquellas zonas adyacentes a las aguas territoriales sobre las que España pueda ejercer los derechos que le correspondan, referentes al suelo y subsuelo marino, aguas suprayacentes y a sus recursos naturales".

Considerando por tanto la definición de mar territorial en los términos previstos en la Ley 10/1977 (hasta 12 millas náuticas desde la línea de base de mar) en conjunción con el ámbito territorial del Impuesto sobre Sociedades a que se habría hecho referencia, podemos concluir que las sociedades cuya actividad consista en la eólica marina desarrollada en mar territorial español quedan sometidas a gravamen por este impuesto, tal y como se había reseñado en el primer apartado del Informe y deberán tributar conforme a dichas reglas.

En este sentido, y a efectos del REF de Canarias, la Dirección General de Tributos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se ha pronunciado en su [Consulta vinculante V1789-16 de 22 de abril de 2016](#), reconociendo el derecho a aplicar la deducción por inversiones activos fijos nuevos en Canarias por las inversiones realizadas en una planta eólica situada en el mar a una distancia entre 2 y 8 kilómetros de la costa de Gran Canaria.

Por ello, a continuación, es necesario referirse a la regulación de los incentivos fiscales derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, tomando en consideración la conclusión alcanzada respecto de que la actividad de eólica marina desarrollada por una sociedad tributa en el Impuesto sobre Sociedades, que, en último término podrían contribuir a minorar la carga fiscal derivada del desarrollo de dicha actividad.



## Compatibilidad del REF con otras ayudas medioambientales

Dado que los incentivos fiscales del REF de Canarias constituyen ayudas de Estado, en la medida en que en España para la producción de energía eólica marina se concedan otras ayudas, merezcan o no tal calificación de ayudas de Estado, deberá analizarse la compatibilidad entre sí, en atención a lo establecido en la normativa española y comunitaria que resulte de aplicación.

Aunque en España se desconoce si establecerán este tipo de ayudas y como se estructurarían, a modo de ejemplo puede tenerse presente que, como se anunció el pasado 13 de febrero de 2023 mediante [nota de prensa](#), la Comisión Europea<sup>12</sup> ha aprobado, con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, la medida francesa de 2 080 millones de euros para apoyar la producción de electricidad eólica marina en Francia.

La medida, se dice en esta nota de prensa, contribuirá a la consecución de los objetivos energéticos y medioambientales de Francia, así como de los objetivos relacionados con la Estrategia de la UE sobre energías renovables en alta mar y el Pacto Verde Europeo. En este contexto:

- Francia notificó a la Comisión su intención de apoyar la construcción y explotación de un parque eólico marino flotante en el mar frente a las costas del sur de Bretaña. La medida de ayuda, que tendrá una duración de 20 años a partir de la explotación del parque eólico en 2028, contará con un presupuesto total máximo de 2.080 millones de euros.
- El parque eólico marino flotante apoyado por la medida será el primer proyecto comercial de este tipo en Francia. Se espera que tenga una capacidad de 230 a 270 MW y que genere 1 TWh de electricidad renovable al año durante un periodo de 35 años.
- El beneficiario de esta medida se seleccionará mediante un proceso de licitación transparente y no discriminatorio, en el que los licitadores competirán principalmente en función del importe de la ayuda por MW de capacidad instalada.
- La designación del beneficiario está prevista para el segundo semestre de 2023.
- La ayuda se concederá en forma de prima variable mensual bajo el modelo de [Contrato por Diferencia \("CFD"\)](#) bidireccional.
  - » La prima variable se calculará comparando un precio de referencia, determinado en la oferta de licitación del beneficiario ("pay as bid"), y el precio de mercado de la electricidad.
  - » Cuando el precio de mercado sea inferior al precio de referencia, el beneficiario tendrá derecho a recibir pagos equivalentes a la diferencia entre ambos precios.
  - » En cambio, cuando el precio de mercado sea superior al precio de referencia, el beneficiario deberá abonar a las autoridades francesas la diferencia entre ambos precios.
- La Comisión evaluó la medida con arreglo a las [normas sobre ayudas estatales de la UE](#), en particular el artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ("TFUE"), que permite a los Estados miembros apoyar el desarrollo de determinadas actividades económicas en determinadas condiciones, y las [Directrices sobre ayudas estatales en favor del clima, la protección del medio ambiente y la energía de 2022 \(2022/C 80/01\)](#).

<sup>12</sup> La versión no confidencial de la decisión se publicará con el número de asunto SA.100269 en el registro de ayudas estatales de la página web de competencia de la Comisión, una vez resueltas las cuestiones de confidencialidad.



- La Comisión constató que la medida facilita el desarrollo de determinadas actividades económicas, en particular la producción de electricidad renovable a partir de tecnología eólica marina flotante. Tiene un "efecto incentivador", ya que el beneficiario no llevaría a cabo las inversiones en el proyecto de parque eólico marino flotante sin la ayuda pública. Tiene un impacto limitado en la competencia y el comercio dentro de la UE. En particular, es necesaria y adecuada para fomentar la producción de electricidad renovable. Además, es proporcionada, ya que el nivel de la ayuda corresponde a las necesidades efectivas de financiación.
- En opinión de la Comisión Europea, se establecerán las salvaguardias necesarias para limitar la ayuda al mínimo, incluido un proceso de licitación competitiva para la concesión de la ayuda, de manera que la medida tiene efectos positivos, en particular medioambientales, que compensan cualquier posible efecto negativo en términos de distorsión de la competencia y el comercio en la UE.
- Sobre esta base, la Comisión aprobó la medida francesa con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE.

Las Directrices de la Comisión de 2022 sobre ayudas estatales en favor del clima, la protección del medio ambiente y la energía orientan sobre cómo evaluará la Comisión la compatibilidad de las medidas de ayuda en materia de protección del medio ambiente, incluida la protección del clima, y de energía que están sujetas al requisito de notificación con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE.

Las Directrices, permiten a los Estados miembros apoyar la producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables, siempre que se cumplan determinadas condiciones. Estas normas pretenden ayudar a los Estados miembros a cumplir los ambiciosos objetivos energéticos y climáticos de la UE con el menor coste posible para los contribuyentes y sin distorsiones indebidas de la competencia en el mercado único.

En concreto, en el apartado 121 de las mismas, se establece que, tal y como ha hecho Francia, *"las ayudas a la descarbonización pueden adoptar diversas formas, incluidas subvenciones iniciales y contratos para pagos de ayudas en curso, como los contratos por diferencias. Las ayudas que cubran costes relacionados principalmente con la explotación y no con la inversión solo deberán utilizarse cuando el Estado miembro demuestre que esto da lugar a decisiones operativas más respetuosas con el medio ambiente"*.

Respecto a los CFD el apartado 69 precisa que *"un contrato por diferencias da derecho al beneficiario a un pago igual a la diferencia entre un precio de ejercicio fijo y un precio de referencia, tal como un precio de mercado por unidad de producción. En los últimos años se han utilizado para medidas relacionadas con la producción de electricidad, pero podrían implicar también un precio de referencia vinculado al RCDE, es decir, contratos de «carbón» por diferencias. Estos contratos de carbono por diferencias pueden ser una herramienta útil para introducir en el mercado tecnologías punteras que puedan ser necesarias para lograr la descarbonización industrial. Los contratos por diferencias también pueden suponer restituciones de los beneficiarios a los contribuyentes o consumidores en los periodos en los que el precio de referencia supere al precio de ejercicio"*.

Por todo lo expuesto, estas ayudas en forma de CFD tienen la consideración de ayudas de Estado medioambientales de acuerdo con lo establecido en las citadas Directrices.

Por ello, si España optara por un modelo similar al francés y aprobara para la eólica marina ayudas estatales en forma de CFD o cualquier otra forma, deberá valorarse las obligaciones de notificación, intensidad y acumulación de ayudas y, particularmente, la compatibilidad de las mismas con las ayudas de Estado regionales como las del REF de Canarias.

En una primera aproximación a la materia y, sin que constituya una opinión legal sobre el tema dado que no existe hoy en día marco legal que regule estas eventuales ayudas de Estado en España<sup>13</sup>, debe tenerse presente que el artículo 42 del Reglamento n.º 651/2014, nominado "ayudas de funcionamiento para la promoción de la electricidad procedente de fuentes renovables", establece lo siguiente:

*"1. Las ayudas de funcionamiento para la promoción de la electricidad procedente de fuentes renovables serán compatibles con el mercado interior a tenor del artículo 107, apartado 3, del Tratado, y quedarán exentas de la obligación de notificación establecida en el artículo 108, apartado 3, del Tratado, siempre que se cumplan las condiciones previstas en el presente artículo y en el capítulo I.*

*2. Las ayudas se otorgarán mediante un procedimiento de licitación sobre la base de criterios claros, transparentes y no discriminatorios, que estará abierto a todos los productores que produzcan electricidad a partir de fuentes de energía renovables con carácter no discriminatorio.*

*3. El procedimiento de licitación podrá limitarse a tecnologías específicas cuando un proceso abierto a todos los productores daría lugar a un resultado no óptimo que no pueda abordarse en el proceso de diseño teniendo en cuenta en particular:*

*i) el potencial a largo plazo de una tecnología nueva e innovadora dada, o*

*ii) la necesidad de diversificación, o*

*iii) las limitaciones y la estabilidad de la red, o*

*iv) el sistema (de integración) de costes, o*

*v) la necesidad de evitar que las primas de apoyo a la biomasa falseen el mercado de las materias primas.*

*Los Estados miembros llevarán a cabo una evaluación detallada de la aplicabilidad de dichas condiciones e informarán a la Comisión con arreglo a las modalidades descritas en el artículo 11, letra a).*

*4. Se concederán ayudas a las tecnologías nuevas e innovadoras vinculadas a energías renovables mediante un procedimiento de licitación abierto a al menos una de estas tecnologías, sobre la base de criterios claros, transparentes y no discriminatorios. Tales ayudas solo podrán beneficiar en total al 5 % como máximo de la nueva capacidad de producción de electricidad prevista a partir de fuentes de energía renovables al año.*

*5. Las ayudas consistirán en una prima añadida al precio de mercado al que los productores venden su electricidad directamente en el mercado.*

*6. Los beneficiarios de la ayuda estarán sujetos a responsabilidades de balance normales. Los beneficiarios podrán externalizar sus responsabilidades de balance a otras empresas, como los agregadores.*

*7. No se concederán ayudas cuando los precios sean negativos.*

<sup>13</sup> Que podrían incluir un régimen propio de incompatibilidades de ayudas de Estado, notificaciones, intensidad de las ayudas, acumulación, etc.

8. En ausencia del procedimiento de licitación descrito en el apartado 2, podrán concederse ayudas a las instalaciones con una capacidad eléctrica instalada inferior a 1 MW para la producción de electricidad procedente de todas las fuentes de energía renovables, a excepción de la energía eólica, en cuyo caso podrán concederse ayudas en ausencia del procedimiento de licitación descrito en el apartado 2 a instalaciones con una capacidad eléctrica instalada inferior a 6 MW o a instalaciones con menos de tres unidades de generación. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 9, cuando se concedan ayudas en ausencia de un procedimiento de licitación, deberán respetarse las condiciones previstas en los apartados 5, 6 y 7. Además, cuando las ayudas se concedan en ausencia de un procedimiento de licitación, serán aplicables las condiciones previstas en el artículo 43, apartados 5, 6 y 7.

9. Las condiciones indicadas en los apartados 5, 6 y 7 no se aplicarán a las ayudas de funcionamiento concedidas a instalaciones con una capacidad eléctrica instalada inferior a 500 kW para la producción de electricidad procedente de todas las fuentes de energía renovables, a excepción de la energía eólica, en cuyo caso estas condiciones no se aplicarán a las ayudas de funcionamiento concedidas a instalaciones con una capacidad eléctrica instalada inferior a 3 MW o a instalaciones con menos de tres unidades de generación.

10. A efectos del cálculo de las capacidades máximas mencionadas en los apartados 8 y 9, las instalaciones con un punto de conexión común a la red eléctrica se considerarán una única instalación.

11. Las ayudas solo se concederán hasta que la instalación generadora de la electricidad procedente de fuentes renovables se haya amortizado completamente de acuerdo con principios contables generalmente aceptados. Toda ayuda a la inversión recibida anteriormente deberá deducirse de la ayuda de funcionamiento".

Por tanto, las ayudas de Estado en forma de CFD y las ayudas de Estado regionales del REF de Canarias podrían ser compatibles, pero habrá que ver el modo en que finalmente se estructuren y aprueben, dado que podrían incluir un régimen propio de incompatibilidades de ayudas de Estado, notificaciones, intensidad de las ayudas, acumulación, etc.

## La Zona Especial Canaria

La Zona Especial Canaria (en adelante, "ZEC") es una zona de baja tributación creada dentro de la UE, autorizada por la Comisión Europea regulada en la Ley 19/1994 y, desarrollada, por el Real Decreto 1758/2007 de 28 de diciembre (Reglamento del REF de Canarias).

Los beneficios que prevé la ZEC estarán vigentes hasta 31-12-2027 y podrán ser ampliados previa autorización de la Comisión Europea, todo ello al albor de la Decisión de 19 de abril de 2021 de la Comisión Europea que adoptó las Directrices revisadas sobre ayudas regionales cuya vigencia se extiende al periodo 2022 a 2027 y derivado del Mapa de Ayudas de Finalidad Regional para el mismo periodo aprobado el 17 de marzo de 2022.

La ZEC permite a las compañías pagar un Impuesto de Sociedades a un tipo del 4%, hasta un máximo de la base imponible dependiendo del número de puestos de trabajo creados. Tras la reforma del régimen, la base imponible sobre la que se aplica el tipo del 4% es la siguiente:

- 1.800.000 euros para aquellas entidades de la ZEC que cumplan el requisito de creación mínima de empleo (5 ó 3 trabajadores dependiendo de la localización dentro del Archipiélago).
- 500.000 euros adicionales por cada puesto de trabajo que exceda del mínimo señalado, hasta alcanzar los 50 puestos de trabajo, a partir de los cuales, la base imponible tributará ilimitadamente al tipo del 4%.

En cualquier caso, se aplica el siguiente límite de ayudas de Estado:

- La minoración de la cuota íntegra del IS, como consecuencia de la diferencia de tipos (4% vs 25%) no podrá ser superior al 30% del importe neto de la cifra de negocios de la entidad ZEC.

Las condiciones para acceder a la inscripción de una entidad en el ámbito de la ZEC son:

- Ser una sociedad o sucursal de nueva creación que tenga su domicilio social y la sede de su dirección efectiva en el ámbito geográfico de la ZEC (las Islas Canarias). Tendrán la consideración de entidades de nueva creación las constituidas con anterioridad a la obtención de la autorización previa siempre que la constitución se limite al aspecto o tramitación formal que la misma conlleva y no vaya acompañada de actividad económica alguna hasta tanto se produzca la inscripción (artículo 41 del Reglamento del REF).

Se entenderá que una entidad tiene su sede de dirección efectiva en un territorio cuando en él radique la dirección y control del conjunto de sus actividades (artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades).

» Que al menos uno de sus administradores resida en las Islas Canarias.

- Su objeto social debe consistir en la realización, en el ámbito geográfico de la ZEC, de las actividades previstas en el anexo de la Ley 19/1994 *"lista de actividades económicas (según la clasificación NACE Rev.2)"*, a la que se adjunta enlace:

<https://canariaszec.com/wp-content/uploads/Listado-de-actividades-incluidas-seg%C3%BAAn-NACE-Rev.-2-2019.pdf>

El epígrafe 35.11 comprende la explotación de las instalaciones de generación de energía eléctrica, incluidas las energías térmica, nuclear, hidroeléctrica, por turbina de gas, diésel y de fuentes renovables.

- La entidad deberá efectuar una inversión mínima en los dos primeros años de 100.000 euros (Gran Canaria y Tenerife) o 50.000 euros (Hierro, Fuerteventura, Gomera, Lanzarote y La Palma) en activos fijos necesarios para el desarrollo de las actividades económicas efectuadas en la ZEC.
  - » Se entenderán realizadas dentro del plazo previsto para realizar las inversiones, las efectuadas una vez presentada la solicitud de la entidad para su inscripción en el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria (ROEZEC) y durante el plazo de dos años a contar desde el día siguiente al de la notificación de la inscripción en dicho Registro.
- Deberá crear al menos 5 puestos de trabajo (Gran Canaria y Tenerife) o 3 puestos de trabajo (Hierro, Fuerteventura, Gomera, Lanzarote y La Palma) en el ámbito geográfico de la ZEC dentro de un plazo de 6 meses y mantener como mínimo en ese número el promedio anual de plantilla durante el período de disfrute de este régimen.
  - » Cuando la actividad se haya ejercido anteriormente bajo otra titularidad, se exigirá que se creen 5 o 3 puestos de trabajos adicionales, respectivamente (casos de actividad preexistente, esto es, realizada anteriormente bajo otra titularidad).

- » Los plazos para el cumplimiento del requisito de creación de empleo empezarán a contar a partir del día siguiente al de la notificación de la inscripción en el ROEZEC.
- » No obstante, a los efectos del cumplimiento de este requisito, computarán los puestos de trabajo creados una vez presentada la solicitud de inscripción en el ROEZEC, cuando se acredite la necesidad de la contratación para la realización de las actividades preparatorias o previas al inicio del funcionamiento de la entidad.
- Presentar ante el Consejo Rector de la ZEC una memoria de las actividades a realizar que avale su solvencia, viabilidad, competitividad internacional y su contribución al desarrollo económico y social de las islas Canarias y cuyo contenido será vinculante para la entidad. La variación de la actividad deberá ser autorizada expresamente por el Consejo Rector de la ZEC.
- Por todo lo anterior, tanto el cómputo del plazo de dos años para efectuar las inversiones previstas en dicho precepto, como el de 6 meses para crear empleo, se iniciarán desde su inscripción en el Registro Oficial de la ZEC.

## Bonificación por producción de bienes corporales

La bonificación por producción de bienes corporales está regulada en el artículo 26 de la Ley 19/1994, del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Este incentivo fiscal permite que los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades (IS) apliquen una bonificación del 50% de la cuota íntegra correspondiente a los rendimientos derivados de la venta de bienes corporales producidos en Canarias por ellos mismos, propios de actividades agrícolas, ganaderas, industriales y pesqueras, siempre que, en este último caso, la pesca de altura se desembarque en los puertos canarios y se manipule o transforme en el archipiélago. Se podrán beneficiar de esta bonificación las personas o entidades domiciliadas en Canarias o en otros territorios que se dediquen a la producción de tales bienes en el archipiélago, mediante sucursal o establecimiento permanente.

La bonificación se aplicará sobre la parte de la cuota íntegra que proporcionalmente corresponda a los rendimientos derivados de las actividades de producción señaladas.

También la bonificación será aplicable a los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que ejerzan las mismas actividades y con los mismos requisitos exigidos a los sujetos pasivos del IS siempre y cuando determinen los rendimientos por el método de estimación directa.

Por tanto, para que los sujetos pasivos del IS puedan aplicar esta bonificación, es necesario que se cumplan los requisitos siguientes:

- Que las entidades se dediquen a la producción y venta de bienes corporales;
- Que los bienes corporales estén producidos en Canarias por los propios sujetos pasivos del IS;
- Que los sujetos pasivos estén domiciliados en Canarias;
- Que los rendimientos derivados de la venta de bienes corporales sean distintos a los propios de actividades de construcción naval, fibras sintéticas, industria del automóvil, siderurgia e industria del carbón.

Por lo que respecta a la producción de energía eléctrica, el término bien corporal no está definido en el ordenamiento tributario, por lo que resulta de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 12 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:

- En tanto no se definan por el ordenamiento tributario los términos empleados en sus normas se entenderán conforme a su sentido jurídico, técnico o usual, según proceda.
- Sentido jurídico: el artículo 6.1 de la Ley 20/1991, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (a efectos del Impuesto General Indirecto Canario –IGIC– y en idéntico sentido se recoge a efectos del IVA) establece que:
  - » A estos efectos, tendrán la consideración de bienes corporales el gas, el calor, el frío, la energía eléctrica y demás modalidades de energía.
- Desde un sentido usual, son bienes corporales, los bienes tangibles, es decir, los que tienen una extensión limitada y producen impresión en nuestros sentidos por calidades que le son propias.

Este criterio deriva de las consultas vinculantes 1419-99, V 0670-09, V2845-10, V0223-11 y V1264-15, entre otras, en la que se concluye que la venta de energía eléctrica producida por una empresa en Canarias tendrá derecho a la aplicación de la bonificación.

## Deducción por adquisición de activos fijos nuevos

La Deducción por inversión en Activos Fijos Nuevos (DAFN) es un incentivo fiscal aplicable en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas que puede constituir una ayuda a la inversión o al funcionamiento, en función del tipo de inversión, y presenta las siguientes características:

- Se aplica en Canarias conforme a la normativa vigente en 1996 derivado del mantenimiento del Régimen establecido por la Disposición Adicional Duodécima de la Ley 43/1995, aunque esta cuestión no está definitivamente cerrada por los tribunales, ya que por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se ha planteado la aplicación subsidiaria del régimen previsto en el artículo 26 de la Ley 61/1978: TEAC 29 de junio de 2020.
- Se trata de una Deducción en cuota equivalente al 25% de la inversión realizada a lo largo del ejercicio en la adquisición de AFN en Canarias.
- La Base de la deducción es el precio de adquisición o coste de producción de activos fijos nuevos (excluido, entre otros, el valor del suelo).
- Acreditación de la deducción:
  - » Según la DA 12ª con la puesta a disposición de los activos
  - » Según el artículo 26 de la Ley 61/1978, con su entrada en funcionamiento
- Plazo de mantenimiento de los bienes, 5 años (o vida útil si fuera inferior).

- Coeficientes límite en la cuota líquida:
  - » Límite máximo por ejercicio: 50% de la cuota líquida (15%+35%)
  - » Islas verdes (La Palma, El Hierro y La Gomera): 60% (15%+45%)
  - » Límite conjunto. 70% (35%+35%) para todos los tipos de inversiones por las deducciones pendientes de practicar al inicio del período, procedentes de ejercicios anteriores.
    - No para la del propio ejercicio que tiene su propio límite: 50% de la cuota líquida.
    - Islas verdes: 80% (35%+45%)

## La Reserva para Inversiones en Canarias

La Reserva para Inversiones en Canarias (en adelante, RIC) es un beneficio fiscal regulado, principalmente, en el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y en el Real Decreto 1758/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de dicha Ley.

La RIC es un incentivo fiscal del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) y se configura, al igual que el resto de incentivos del REF, como una ayuda de Estado de finalidad regional. Con la Reserva se busca paliar las desventajas estructurales de una región desfavorecida a través de ayudas a la inversión inicial, así como de las ayudas de funcionamiento.

Consiste en una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades (**IS**), de las cantidades que, con relación a sus establecimientos situados en Canarias, destinen de sus beneficios a la reserva para inversiones de acuerdo con lo establecido en el citado artículo.

- El beneficio apto para dotar la RIC es aquél que se deriva de la realización de actividades económicas por los establecimientos situados en Canarias y derivado de operaciones realizadas con medios y materiales afectos a dichos establecimientos.
- Límite de la reducción en la base imponible: el 90% del beneficio apto (del beneficio no distribuible) de cada período impositivo en el que se realicen dotaciones a la RIC.

Requisitos para beneficiarse de esta reducción en la base imponible del IS:

- Inversiones. Las sociedades que han dotado la RIC deberán realizar inversiones por el importe de la dotación practicada – de la reducción en la base imponible del IS – en los bienes considerados apta materialización de la RIC.
- Plazo inversiones. Realizar las inversiones en un plazo de 3 años a contar desde la fecha de devengo del ejercicio en el que se dota la RIC (normalmente, a contar desde el 31 de diciembre del ejercicio en el que se realice la reducción en la base imponible del IS).
- Mantenimiento de las inversiones. Deben mantenerse durante 5 años (10 en caso de inmuebles).



# NORMATIVA APLICABLE

A continuación, se desglosa la normativa referida en el informe:

- (i) [Constitución española de 1978](#).
- (ii) [Ley Orgánica 8/1980](#), de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.
- (iii) [Ley 19/1994](#), de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias
- (iv) [Ley 20/1991](#), de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.
- (v) [Ley 58/2003](#), de 17 de diciembre, General Tributaria.
- (vi) [Ley 27/2014](#), de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
- (vii) [Ley 43/1995](#), de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
- (viii) [Ley 61/1978](#), de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
- (ix) [Ley 7/1985](#), de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- (x) [Ley 24/2013](#), de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
- (xi) [Ley 11/1997](#), de 2 de diciembre, de regulación del sector eléctrico canario.
- (xii) [Ley 22/1988](#), de 28 de julio, de Costas.
- (xiii) [Ley 10/1977](#), de 4 de enero, sobre mar territorial.
- (xiv) [Ley 9/2011](#), de 21 de marzo, por la que se crea el canon eólico y el Fondo para el Desarrollo Tecnológico de las Energías Renovables y el Uso Racional de la Energía en Castilla-La Mancha.
- (xv) [Ley 1/2012](#), de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras (Castilla-León)
- (xvi) [Ley 8/2009](#), de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental.
- (xvii) [Ley 2/2011](#), de 26 de enero, por la que se modifican la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del sector eléctrico canario y la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las directrices de ordenación general y las directrices de ordenación del turismo en Canarias.
- (xviii) [Real Decreto 417/2006](#), de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.



- (xix) [Real Decreto 241/1992](#), de 13 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias en lo relativo a los incentivos fiscales a la inversión.
- (xx) [Real Decreto-ley 15/2014](#), de 19 de diciembre, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
- (xxi) [Real Decreto Legislativo 2/2004](#), de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- (xxii) [Real Decreto Legislativo 1/2004](#), de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
- (xxiii) [Real Decreto 876/2014](#), de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.
- (xxiv) [Real Decreto 713/2022](#), de 30 de agosto, de traspaso de funciones y servicios de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de ordenación y gestión del litoral.
- (xxv) [Real Decreto 1690/1986](#), de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.
- (xxvi) [Real Decreto 1464/2007](#), de 2 de noviembre, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración catastral de los bienes inmuebles de características especiales.
- (xxvii) [Real Decreto Legislativo 1175/1990](#), de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.
- (xxviii) [Real Decreto 622/2022](#), de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 169/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de Canarias.
- (xxix) [Real Decreto 1758/2007](#), de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en las materias referentes a los incentivos fiscales en la imposición indirecta, la reserva para inversiones en Canarias y la Zona Especial Canaria.
- (xxx) [Orden de 30 de octubre de 1992](#) por la que se determina la cuantía del canon de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, establecido en el artículo 84 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
- (xxxi) [Orden HAC/3521/2003](#), de 12 de diciembre, por la que se fija el coeficiente de referencia al mercado (RM) para los bienes inmuebles de características especiales.

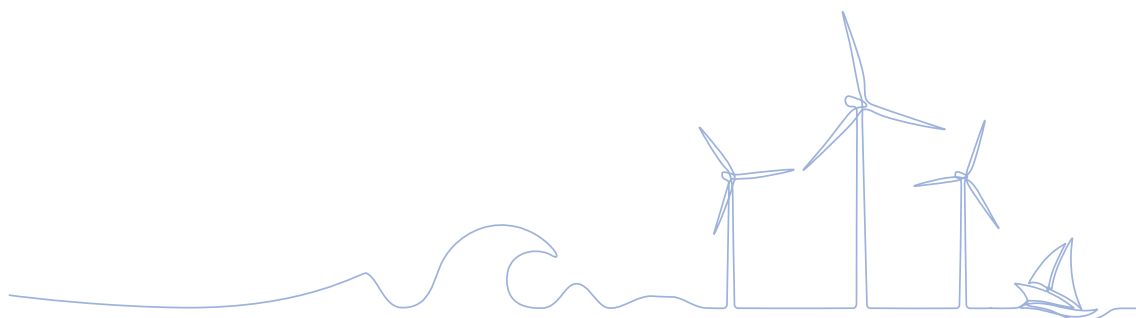


# ANEXO

COMUNIDAD AUTÓNOMA	NOMBRE DEL TRIBUTO
CATALUÑA	Gravamen de protección civil
	Canon del agua
	Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales
	Canon sobre la deposición controlada de residuos municipales
	Canon sobre la incineración de residuos municipales
	Canon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción
	Canon sobre la deposición controlada de residuos industriales
	Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos
	Impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial
	Impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria
	Impuesto sobre las viviendas vacías
	Impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas
	Impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica
	Impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas
	Impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente
GALICIA	Canon del agua
	Impuesto sobre contaminación atmosférica
	Impuesto sobre el daño medioambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada
	Canon eólico
	Impuesto compensatorio ambiental minero
	Canon de inmuebles en estado de abandono
ANDALUCÍA	Impuesto sobre tierras infrautilizadas
	Impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera
	Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales
	Impuesto sobre depósito de residuos radiactivos (sin efecto)
	Impuesto sobre depósito de residuos peligrosos
	Canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma
	Impuesto sobre los depósitos de clientes en las Entidades de Crédito (sin efecto)
	Impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso

COMUNIDAD AUTÓNOMA	NOMBRE DEL TRIBUTO
PRINCIPADO DE ASTURIAS	Impuesto sobre fincas o explotaciones agrarias infrautilizadas
	Impuesto sobre el juego del bingo
	Impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua
	Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales
	Impuesto sobre el desarrollo de determinadas actividades que inciden en el medio ambiente
	Recargo sobre las cuotas mínimas del Impuesto sobre Actividades Económicas
CANTABRIA	Canon del agua residual
	Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos
	Canon por la implantación en el suelo rústico de la Comunidad Autónoma de Cantabria de parques eólicos y fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica y la evacuación de dicha energía generada a la red
	Recargo sobre las cuotas mínimas del Impuesto sobre Actividades Económicas
LA RIOJA	Canon de saneamiento
	Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos
	Impuesto sobre el impacto visual producido por los elementos de suministro de energía eléctrica y elementos fijos de redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas
	Recargo sobre las cuotas mínimas del Impuesto sobre Actividades Económicas
REGIÓN DE MURCIA	Impuesto sobre los premios del juego del bingo
	Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales
	Impuesto por emisiones de gases contaminantes a la atmósfera
	Impuesto sobre el almacenamiento o depósito de residuos en la Región de Murcia
	Canon de saneamiento
	Recargo sobre las cuotas mínimas del Impuesto sobre Actividades Económicas
COMUNIDAD VALENCIANA	Canon de saneamiento
	Impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente
	Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos e incineración, coincineración y valorización energética
	Impuesto sobre viviendas vacías
	Impuesto sobre estancias turísticas (vigor 19-12-2023)
	Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales (vigor 1-1-2025)
	Impuesto sobre la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera provenientes de instalaciones (vigor 1-1-2025)
	Impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica (vigor 1-1-2025)

COMUNIDAD AUTÓNOMA	NOMBRE DEL TRIBUTO
ARAGÓN	Impuesto medioambiental sobre las aguas residuales
	Impuesto medioambiental sobre la emisión de contaminantes a la atmósfera
	Impuesto medioambiental sobre las grandes áreas de venta
	Impuesto medioambiental sobre determinados usos y aprovechamientos de agua embalsada
	Impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión
CASTILLA-LA MANCHA	Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente
	Canon eólico
	Canon medioambiental de la Directiva Marco del Agua (aplicación suspendida)
CANARIAS	Canon de vertido
	Impuesto especial sobre combustibles derivados del petróleo
	Impuesto sobre las Labores del Tabaco
	Impuesto sobre el impacto medioambiental causado por determinadas actividades (aplicación suspendida)
	Impuesto sobre los depósitos de clientes en las Entidades de Crédito (sin efecto)
EXTREMADURA	Canon de saneamiento
	Impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos
	Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente
	Impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito (sin efecto)
	Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero
ISLAS BALEARES	Impuesto sobre los premios del juego del bingo
	Canon de saneamiento de aguas
	Impuesto sobre estancias turísticas
	Canon sobre el vertido y la incineración de residuos de las Illes Balears
CASTILLA Y LEÓN	Impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión
	Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos.



Este documento contiene información de carácter general y no constituye opinión profesional ni servicio de asesoramiento legal o fiscal.

© Junio 2023. J&A Garrigues, S.L.P. Quedan reservados todos los derechos. Se prohíbe la explotación, reproducción, distribución, comunicación pública o transformación, total o parcial, de esta obra sin autorización previa y por escrito de J&A Garrigues, S.L.P.

---

INFORME ELABORADO POR

**GARRIGUES**







C/ Orense, 34.  
Torre Norte. 4ª Planta.  
28020 Madrid

[www.aeeolica.org](http://www.aeeolica.org)

